



**UNIVERSIDAD DE PANAMA
INSTITUTO DE ESTUDIOS NACIONALES**

**ANTEPROYECTO
DE
CONSTITUCION
DE LA
REPUBLICA DE PANAMA**

CONCIUDADANOS

La Universidad de Panamá tiene entre sus deberes el de contribuir al diagnóstico y a la solución de los problemas nacionales. El país atraviesa actualmente una coyuntura histórica y política crítica, que demanda el concurso de todos para la consolidación del sistema democrático y la búsqueda de un mejor porvenir para las futuras generaciones. En cumplimiento de esta responsabilidad, la Universidad presenta formalmente este anteproyecto de Constitución de la República de Panamá.

Tiene el carácter de un documento de trabajo, que ha sido elaborado por un equipo interdisciplinario del Instituto de Estudios Nacionales y que se ofrece al examen y a la discusión de los panameños, con el afán de aportar elementos al debate constitucional, que se perfila como insoslayable.

He sido un convencido del valor incontestable de una Constituyente como forma de renovar el sistema político de la Nación panameña, luego del padecimiento de la dictadura militar. No porque crea en los efectos mágicos que dimanasen de una Carta Magna, sino porque daría oportunidad a todos los panameños de participar democráticamente en la reorganización de la vida social y política del país. Es decir, dotaría al texto constitucional de legitimidad democrática, esencial para el cumplimiento de la propia Constitución.

El documento de trabajo cuenta con algunas innovaciones que probablemente despertarán suspicacias en algunos espíritus, de los cuales no vale la pena ocuparse. Sin embargo, con independencia de los errores y omisiones inherentes a toda obra humana, este anteproyecto de Constitución fue elaborado sobre los fundamentos de la buena fe, el desinterés político y teniendo como norte los mejores anhelos de la nación panameña. Conviene destacar, en evitación de equívocos o infundios maliciosos, que el anteproyecto de Constitución no fue concebido para satisfacer ni a determinadas fuerzas políticas ni a intereses parciales del conglomerado social. Es un anteproyecto para que todos podamos participar en la mejor y más digna empresa que puede tener un ciudadano: el progreso y el enaltecimiento de la patria.

Dr. CARLOS IVAN ZUÑIGA GUARDIA

Rector

Dado en la Ciudad Universitaria, a los nueve días del mes de enero de mil novecientos noventa y cuatro.

Panamá, 9 de enero de 1994

Doctor
Carlos Iván Zúñiga Guardia
Rector Magnífico
Universidad de Panamá
E. S. D.

Distinguido Señor Rector:

En el **Instituto de Estudios Nacionales** se conformó el año pasado una comisión de Estudios Constitucionales, integrada por los doctores César Quintero, Carlos Bolívar Pedreschi, Dimas Lidio Pitty y quien suscribe, con la participación de los doctores Bernardo Fernández y Jorge Giannareas, cuyo objetivo era la elaboración de un proyecto de Constitución moderna, que sirviese como documento de trabajo en el evento de que adviniese una Constituyente.

El texto adjunto contiene el resultado del trabajo de dicha Comisión. Este expresa el parecer de la mayoría de sus miembros. Sin embargo, como es natural, no todos los principios y artículos han merecido la unanimidad de la misma.

Oportunamente se le remitió copia del anteproyecto a todos los profesores de Derecho Constitucional de la Universidad de Panamá. En consecuencia, además del aporte invaluable de sus miembros, la Comisión contó, de esta forma, con las observaciones atinadas del profesor Rafael Murgas, y también de otros distinguidos profesionales como el licenciado Adán Arnulfo Arjona.

Sobre la técnica formal y el contenido del anteproyecto, se ha abundado en la exposición de motivos. Quizá sólo faltaría agregar que América Latina no cuenta con una teoría constitucional acabada. Dicha teoría tendrá que construirse, por ejemplo, sobre los relevantes aportes históricos de García Laguardia; los dogmático-comparativos de Quiroga Lavié o Fix Samudio; y los metodológicos de Häberle. Ello no quiere decir que el anteproyecto esté ayuno de una teoría constitucional. Los supuestos de una teoría constitucional están implícitos.

Empero, no basta un texto constitucional moderno para contribuir a la consolidación de la democracia. Será responsabilidad de la Jurisprudencia, con sus fallos; de los investigadores con sus comentarios y manuales o monografías, enriquecer, desarrollar y descubrir los límites de la Carta Fundamental.

La preparación del documento de trabajo constitucional adjunto, no es producto del capricho ni de la improvisación. A pesar de que serán las fuerzas sociales y políticas panameñas las que decidan la pertinencia de una nueva Constitución, fue significativo para la Comisión del IDEN que, recientemente y por los más variados factores, Brasil, Colombia y Perú se dedicasen a los afanes de la reforma constitucional. Y que también, por disímiles razones, Sudáfrica, la Confederación de Estados Independientes e Inglaterra --ésta por imperativos del derecho comunitario-- hayan iniciado discusiones y procesos de reforma constitucional. En nuestro caso, los últimos acontecimientos en el país, luego del régimen militar y la invasión, han sido indicios suficientes para plantear la necesidad de una nueva Constitución para la República de Panamá.

El Instituto de Estudios Nacionales cumple así con uno de los objetivos de una Universidad moderna: dar los elementos técnicos necesarios para que el subsistema político tome decisiones racionales.

Tradición no es algo que se tenga, sino por lo que se debe luchar. Así como las Constituciones primigenias de América Latina también jugaron el papel de ser constitutivas del Estado --el caso panameño es proverbial en este sentido--, la Constitución para la República de Panamá no será esta vez origen y fuente del Estado-Nación; será la forma de reestructurar la organización del Estado y la Sociedad sobre los fundamentos de una tradición constitucional y de una nación que anhela la democracia y la libertad, procesos inacabados y en permanente transformación. La Constitución será esta vez, de alguna manera, el proyecto del futuro. En otras palabras, la llave para abrir las puertas de un porvenir más halagüeño.

Además de los aportes de los distinguidos miembros de la Comisión, el Instituto agradece el interés de los profesionales ya mencionados y la colaboración de la Lcda. Brunilda Castillo, en el levantamiento del texto y el apoyo diligente de Ada Girón y Jesús Camaño, miembros del personal administrativo del IDEN.

Con la seguridad de la más alta consideración y aprecio, llega a usted el fruto de este esfuerzo.

Miguel González Marcos
Director del Instituto de Estudios Nacionales

INDICE

UNIVERSIDAD DE PANAMA

EXPOSICION DE MOTIVOS

INSTITUTO DE ESTUDIOS NACIONALES

PREAMBULO

TITULO I

LA NACION Y EL ESTADO

AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMA

Capítulo 1º. Disposiciones Generales	3
--------------------------------------	---

Capítulo 2º. La Nacionalidad	4
------------------------------	---

Dr. Carlos Iván Zuñiga Guardia
Rector

TITULO II

LOS DERECHOS POLITICOS

Capítulo 1º. Derechos Individuales	7
------------------------------------	---

Sección 1a. Principios Generales	7
----------------------------------	---

ANTEPROYECTO

DE

CONSTITUCION

DE LA

REPUBLICA DE PANAMA

Capítulo 2º. Derechos Políticos	14
---------------------------------	----

Sección 1a. Principios Generales	14
----------------------------------	----

Sección 2a. El Sufragio	16
-------------------------	----

Sección 3a. Los Partidos Políticos	19
------------------------------------	----

Sección 4a. El Tribunal Electoral	21
-----------------------------------	----

Sección 5a. La Fiscalía Electoral	24
-----------------------------------	----

Sección 6a. El Director del Instituto de Estudios Nacionales	26
--	----

Sección 7a. El Agro	27
---------------------	----

TITULO III

LOS DERECHOS POLITICOS

Capítulo 1º. La Ciudadanía	29
----------------------------	----

Capítulo 2º. El Sufragio	29
--------------------------	----

Capítulo 3º. Los Partidos Políticos	31
-------------------------------------	----

Capítulo 4º. El Tribunal Electoral	32
------------------------------------	----

Capítulo 5º. La Fiscalía Electoral	33
------------------------------------	----

Panamá, 1994

AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMA

Dr. Carlos Iván Zúñiga Guardia
Rector

Dra. Doris Rosas de Mata
Vicerrectora Académica

Dr. Luis Alberto Palacios Aparicio
Vicerrector Administrativo

Dr. Celestino Andrés Araúz M.
Vicerrector de Investigación y Postgrado

Dra. Agatha Williams Springer
Secretaria General

Miguel González Marcos
Director del Instituto de Estudios Nacionales

1991, January

Miguel González Marcos

Director del Instituto de Estudios Nacionales

INDICE

EXPOSICION DE MOTIVOS	i
PREAMBULO	1
TITULO I	
LA NACION Y EL ESTADO	
Capítulo 1°. Disposiciones Generales	3
Capítulo 2°. La Nacionalidad	4
TITULO II	
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES	
Capítulo 1°. Derechos y Garantías Individuales	7
Sección 1a. Principios Generales	7
Sección 2a. Las Garantías Penales	8
Sección 3a. Derechos del individuo en función privada	10
Sección 4a. Derechos del individuo en función pública	12
Sección 5a. Suspensión de derechos individuales	13
Capítulo 2°. Derechos Sociales	14
Sección 1a. La Familia	14
Sección 2a. El Trabajo	16
Sección 3a. La Cultura Nacional	19
Sección 4a. La Educación	21
Sección 5a. Salud, Seguridad y Asistencia Sociales	24
Sección 6a. La Ecología	26
Sección 7a. El Agro	27
TITULO III	
LOS DERECHOS POLITICOS	
Capítulo 1°. La Ciudadanía	29
Capítulo 2°. El Sufragio	29
Capítulo 3°. Los Partidos Políticos	31
Capítulo 4°. El Tribunal Electoral	32
Capítulo 5°. La Fiscalía Electoral	33

TITULO X	
LA FUNCION PUBLICA	
Capítulo 1°. Disposiciones Generales	82
Capítulo 2°. Las Carreras Públicas	83
 TITULO XI	
LA FUERZA PUBLICA	85
 TITULO XII	
EL CANAL DE PANAMA	86
 TITULO XIII	
LA REFORMA DE LA CONSTITUCION	88
 TITULO XIV	
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS	91

UNIVERSIDAD DE PANAMA
INSTITUTO DE ESTUDIOS NACIONALES

**ANTEPROYECTO
DE
CONSTITUCION
DE LA
REPUBLICA DE PANAMA**

Panamá, 1994

EXPOSICION DE MOTIVOS

I. ANTECEDENTES

Los militares que dieron el golpe de Estado del 11 de octubre de 1968 no derogaron formalmente la Constitución de 1946, pero la supeditaron a un Estatuto del Gobierno Provisional que dictaron al día siguiente del golpe. De esta manera surgió un gobierno de facto que como tal imperó durante tres años. Al cabo de ellos, los líderes militares advirtieron la necesidad de constitucionalizar su régimen. Un factor decisivo a este respecto fue la presión del gobierno de los Estados Unidos para negociar los Tratados del Canal de Panamá con el régimen militar, siempre que éste en cualquier forma se legitimara.

En consecuencia, el General Omar Torrijos dictó el trascendente Decreto de Gabinete 214 de 1971. Mediante este Decreto se creó una Comisión de veinticinco miembros para que introdujera “reformas revolucionarias a la Constitución de 1946”; y se convocó a la elección de una Asamblea de Representantes de Corregimientos, la cual debía aprobar las reformas que acordara la referida Comisión. Pero lo que del seno de ésta salió no fueron reformas a la Carta del 46, sino un instrumento constitucional diametralmente opuesto a aquélla. Por tanto, tal instrumento fue denominado, con toda propiedad, Constitución de 1972. Dicha Carta se distinguió por su extraña originalidad. Asimismo, su carácter fue esencialmente realista, en cuanto reflejó fielmente los factores reales de poder a la sazón imperantes. Sin embargo, por otro lado, entrañó el más radical rompimiento con la tradición constitucional panameña y con los principios constitucionales universalmente predominantes. De ahí que su vida habría de ser corta, como en efecto lo fue. Tuvo, así, similar destino al de la Constitución de 1941, que también significó una ruptura, aunque menos extremada, de nuestra tradición constitucional.

Hay quienes han sostenido que la Ley Fundamental de 1972 fue, además, una Constitución **ad hoc**: hecha para la negociación y aprobación de los Tratados Canaleros.

Algunos han considerado esta tesis un tanto exagerada, pero lo cierto es que tan pronto dichos tratados fueron ratificados, el propio régimen militar procedió a reformar la referida Constitución de 1972. Las primeras reformas fueron introducidas en 1978; pero resultaron insuficientes. De ahí que al ascender, en 1982, el general Rubén Darío Paredes a la Comandancia de la Guardia Nacional, optara por promover un cambio integral de la anómala Carta del 72. Para tal fin, logró obtener un acuerdo político nacional del que participaron los más grandes partidos de oposición al régimen militar. Sólo dos partidos opositores, Acción Popular y el Socialista de los Trabajadores, por razones de principio, rehusaron formar parte del aludido concierto político.

La labor reformadora fue encomendada a una Comisión Revisora de dieciséis miembros. Ocho de ellos fueron designados, respectivamente, por cada uno de los ocho partidos existentes y participantes. Los otros ocho miembros fueron escogidos con bastante objetividad y acierto. Entre éstos figuraba el Presidente del Colegio de Abogados, quien presidió la Comisión. Ésta, luego de cuatro intensos meses de trabajo, elaboró una Constitución de contenido y principios radicalmente opuestos a los de la Carta de 1972. Se puede, por ello, decir que el Acto Constitucional de 1983 significó una vuelta a la Constitución de 1946. No obstante, en él persistieron, por presión del régimen imperante, ciertos reductos de la Carta que precisamente se trataba de liquidar. Se mantuvo, por ejemplo, el Preámbulo de aquélla, que resultaba del todo incongruente con el contenido y el espíritu del nuevo texto constitucional; se retuvieron, asimismo, ciertas disposiciones e instituciones inconvenientes; y especialmente, por insistencia de influyentes sectores gobernantes, no se le dio a la nueva Ley Fundamental su auténtico nombre de Constitución de 1983. Dichos sectores, por intereses y compromisos sectarios, insistieron en que el Acto Constitucional de 1983 sólo fuera considerado como una reforma a la deshecha Carta de 1972. Por ello, la Ley Fundamental vigente aún aparece bajo el impropio y extravagante nombre de "Constitución Política de la República de Panamá de 1972 reformada por los Actos Reformativos de 1978 y por el Acto Constitucional de 1983".

Varias personas han sostenido que el actual gobierno civil, al acceder al poder tras la invasión norteamericana de 1989, debió convertirse en Gobierno Provisional y convocar inmediatamente a la elección de una Asamblea Constituyente que instituyera un nuevo ordenamiento jurídico fundamental. Pero este gobierno no quiso o no pudo tomar esa trascendental decisión. Sólo al cabo de tres años de desgaste gubernamental, sometió a referendo nacional un extenso proyecto de reformas constitucionales. Muchas de ellas eran acertadas y deben ser incluidas en una nueva Carta Fundamental; otras, fueron de discutible conveniencia; y algunas resultaron ser inconvenientes. Pero, independientemente de sus méritos y defectos, dichas reformas, por su extemporaneidad, no despertaron simpatía popular. De ahí que el sesenta por ciento del electorado se abstuvo de votar y el cuarenta por ciento que votó lo hizo abrumadoramente en contra de ellas.

Al ser rechazadas las aludidas reformas constitucionales, todo indica que es preciso descartar la vía reformatoria para cambiar la vigente Carta Fundamental. Por eso, no parece existir otro camino que el de hacer una nueva Constitución, ya sea mediante una Asamblea Constituyente o por cualquier otro medio apropiado y eficaz.

Ahora bien, la crisis política que exija un cambio constitucional puede advenir en cualquier momento. Y sería de suma gravedad que surgiera la necesidad de hacer una Constitución y no hubiera estudios y proyectos previos sobre ella.

Ante esta advertida realidad, y aunque la eficacia de las Constituciones no depende de la claridad de su texto ni de las bondades de las instituciones que consagre, el Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá (IDEN) ha considerado necesario elaborar y presentar a la consideración pública este Proyecto de Constitución de la República de Panamá.

II. CONCEPTOS Y METODO

El Instituto de Estudios Nacionales (IDEN) ha elaborado el presente Proyecto de Constitución en el convencimiento de que las Constituciones no se inventan, ni han de ser el producto de simples antojos o elucubraciones personales. Tampoco deben ser programas de aspiraciones irreales o de ideales inaccesibles. Los textos constitucionales deben, ante todo, registrar realidades políticas, sociales, económicas y culturales. De ahí que deban modificarse o cambiarse, con criterio renovador y progresista, en la medida en que dichas realidades varíen o evolucionen. Toda Constitución, si ha de perdurar y regir efectivamente, debe hallarse en armonía con sus antecedentes históricos. Cada pueblo tiene una tradición constitucional y cierta cultura jurídica que no pueden ser desestimadas. Las Constituciones y las Leyes pueden contribuir a superar y perfeccionar el aludido acervo cultural jurídico, pero sin ignorarlo. Los ejemplos demuestran que las Constituciones hechas con desprecio de sus antecedentes, a pesar de la originalidad y corrección formal de algunas de ellas, han tenido vigencia precaria y breve vida.

Al redactar un texto constitucional no sólo deben tenerse presentes las Constituciones anteriores del país, sino también los principios y doctrinas constitucionales universales y algunas Constituciones de otros países, aunque sin caer en la imitación sumisa ni en la copia acrítica.

Con los conceptos expuestos como guía, el IDEN ha aplicado el método de eliminar en lo posible los preceptos y epígrafes superfluos o fútilmente programáticos contenidos en nuestras Constituciones y en otras recientemente promulgadas en algunos países iberoamericanos. Con todo, hemos tenido que optar por mantener en el presente texto varias disposiciones insustanciales, debido a que la supresión de ellas, por su crónico arraigo en nuestro constitucionalismo, podría despertar suspicacias y críticas infundadas.

Lo cierto es que la inveterada propensión a insertar en los textos constitucionales disposiciones puramente decorativas, crea serios problemas. Ante todo, engendra un perjudicial escepticismo jurídico, porque al advertir las gentes la vaciedad de dichos preceptos, creen que las demás normas de la Constitución son igualmente falsas e inoperantes. Por otra parte, cada cual trata de interpretar tales preceptos a su manera; y muchos litigantes los utilizan para cohonestar antojadizas pretensiones, con lo cual recargan la actividad de los tribunales y entorpecen la administración de justicia.

III. TECNICA FORMAL

El Proyecto de Constitución consta de catorce Títulos y tiene más artículos que la Constitución vigente, a pesar de todos los preceptos superfluos y ripios constitucionales que de ella hemos sustraído. Esta circunstancia parece, a primera vista, paradójica e incomprensible. Pero tiene su explicación. El mayor número de artículos obedece, por una parte, a que el Proyecto contiene dos Títulos que no existen en la actual Carta. Son ellos el referente a las Garantías Jurisdiccionales Fundamentales y el concerniente al Canal de Panamá. Por otra parte, hemos aplicado la técnica de no mezclar cuestiones diferentes en un mismo artículo, vale decir, de ordenar los temas en artículos específicos y evitar así la formulación recargada y confusa de éstos. Podrá, por ello, notarse que en este Proyecto la mayoría de los artículos tiende a la sobriedad. De ahí que si en nuestro país se midiera la extensión de las Constituciones no por el número de sus artículos, sino por el de sus palabras, como se hace en otras latitudes, la dimensión de este Proyecto resultaría menor que la de la Constitución vigente.

En el presente Proyecto, los Títulos se dividen en Capítulos y éstos en Secciones. A su vez, todo el texto aparece ordenado en artículos. A pesar de nuestra preferencia por la brevedad de los preceptos, algunos artículos deben necesariamente constar de dos o más párrafos. Estos se denominan primer párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo, etcétera, del respectivo artículo. Es impropio llamarlos acápites, y mucho más incisos.

Como es sabido, ciertos artículos de las Constituciones deben aparecer fraccionados en párrafos numerados. Éstos, según nuestra tradición constitucional, llevan números arábigos y su más correcta denominación es la de numerales. Si llevaran números romanos se llamarían ordinales. Pero no es conveniente dividir los artículos de una Constitución en ordinales. En caso de que algún numeral debiera, a su vez, ser fraccionado, las divisiones se distinguirían con letras minúsculas y su mejor denominación sería la de literales. En este Proyecto no hay, sin embargo, numerales divididos en literales.

Algunos puristas podrían acaso cuestionar la sustantivación de los términos numeral y literal. Pero, en todo caso, su empleo en este sentido es mucho más práctico y lógico que el de “apartado” que utiliza la Constitución española, o el de “inciso” que emplean otras. Pues “apartado”, a lo sumo equivaldría, entre muchas otras cosas, a párrafo; e inciso, gramaticalmente, sólo es una parte, con sentido parcial, dentro de un período, entendiendo por éste un conjunto de oraciones que, cntrelazadas, forman sentido completo.

En el presente Proyecto no aparece ninguno de los llamados “Parágrafos”, como no aparecen en la actual Constitución panameña ni en la anterior; y como tampoco aparecían en el texto originario de la Constitución colombiana de 1886, que sirvió de modelo a la primera de las nuestras. Lo cierto es que los llamados “Parágrafos” siempre denotan insuficiencia de técnica jurídica y lingüística, por lo que en las Constituciones resultan esencialmente contraindicados. El término parágrafo significa exclusivamente párrafo. De modo que si el contenido de un llamado “Parágrafo” es sólo el de un párrafo de un artículo, como tal debe aparecer, sin distintivo ni epígrafe algunos; y si contiene un precepto adicional al artículo al cual va adosado, debe ser desprendido de éste y pasar a ser otro artículo.

Finalmente, EN PAISES COMO LOS NUESTROS, LAS CONSTITUCIONES NO PUEDEN, POR DESGRACIA, SER BREVES. El crecimiento de las funciones del Estado, el principio de racionalización del poder y, sobre todo, la tendencia a interpretar

y a desarrollar torcidamente los textos constitucionales, exigen que éstos contengan disposiciones que en buena técnica debieran ser materia de leyes ordinarias. Por eso, y por las suspicacias que advendrían, nos hemos visto precisados a mantener en el Proyecto artículos y hasta Capítulos y Secciones que, en nuestro concepto, no debieran formar parte de una Carta Fundamental.

1. El Preámbulo .- Los Preámbulos auténticos son una Declaración de Principios. Esta Declaración es, en consecuencia, una valiosa clave para la recta interpretación de la respectiva Carta y para determinar los principios y doctrinas en que se fundamenta. Por tanto, el Preámbulo de una Constitución ha de ser establecido por sus creadores y no por los redactores de Anteproyectos de ella. Con todo, presentamos un diseño de Preámbulo, el cual tiene ante todo, como el resto del Proyecto, carácter orientador y tentativo.

Este modelo propuesto descarta el tradicional Preámbulo de un solo párrafo, dentro del cual no cabe una declaración de principios. El nuestro tiene, pues, la extensión necesaria para formular sobriamente los fines reales y factibles de la proyectada Constitución. De esta manera procuramos, asimismo, desechar cierta nueva especie de Preámbulo que, en medio de su ampulosa frascología, exaltan fines ilusorios y utópicas aspiraciones. Sin embargo, hemos mantenido la tradicional fórmula invocatoria a Dios, con la finalidad de reconocerle cierto valor de positividad al derecho natural.

2. La Nación y el Estado.- El Título I de la actual Constitución se denomina “El Estado Panameño” y contiene algunas disposiciones preliminares sobre el carácter de éste. Nuestro Proyecto fusiona el contenido del referido Título y el del Título II de la Carta vigente, denominado “Nacionalidad y Extranjería”. De esta manera, el nuevo Título propuesto se denomina “La Nación y el Estado” y se divide en dos Capítulos. El primero se intitula “Disposiciones Generales”; y el segundo aparece bajo el epígrafe de “La Nacionalidad”, ya que el concepto de ésta incluye el de extranjería.

En el primer capítulo de este Título I hemos omitido algunas disposiciones que consideramos sobrantes e inconvenientes. Entre ellas se halla la que dice: “La República de Panamá acata las normas del Derecho Internacional”. Este precepto fue una copia defectuosa de un artículo insertado en la desventurada Constitución alemana de 1919 y de otro similar incluido en la malograda Constitución española de 1931. Lo cierto es que en las actuales Constituciones de las aludidas naciones, dicho precepto no aparece, como tampoco figura en ninguna otra Constitución vigente. Distinguidos propugnadores a ultranza de la primacía del Derecho Internacional, como Kelsen, sostienen que este precepto, así formulado, es contraindicado, porque paradójicamente debilita al Derecho Internacional, ya que éste ha de ser cumplido por su propia virtud, sin que sea necesario que ningún Estado deba proclamar que lo acata porque él así lo ha dispuesto. En lo que a Panamá concierne, el mencionado artículo ha sido a veces interpretado en contra de intereses vitales de nuestra Nación y del candoroso altruismo alentado por los autores del susodicho precepto. Por todo ello, estimamos que debe ser omitido, lo cual no significa, en forma alguna, que Panamá no admita la validez de las normas universalmente reconocidas del derecho internacional.

Según el artículo 8 de la vigente Ley Fundamental, “la nacionalidad panameña se adquiere por el nacimiento, por la naturalización o por disposición constitucional”. Esta última modalidad es evidentemente errada, ya que las otras dos también se obtienen por “disposición constitucional”. Además, sólo hay dos clases de nacionalidad: la que se tiene por nacimiento y la que se adquiere por naturalización. Este impropio aditamento fue insertado para calificar la nacionalidad que eventualmente pueden adquirir los niños nacidos fuera del territorio nacional adoptados por panameños. Dichos niños casi siempre son adoptados en su más tierna edad por matrimonios panameños desprovistos de hijos. De ahí que estos infantes no conozcan más patria que la panameña ni más padres que los adoptivos. En consecuencia, se crían y se educan como panameños. Por eso, las exigencias que con respecto a ellos establece el artículo 11 de la Constitución para que devengan panameños, son desacertadas e inhumanas. Ante todo, aparecen como apátridas mientras son menores de edad. Luego, al llegar a la mayoría de ésta,

disponen sólo de un año para declarar “su voluntad de acogerse a la nacionalidad panameña”; y, si lo hacen, pasan a ser nacionales “por disposición constitucional”. A este respecto, hemos constatado que algunos de ellos han sido inscritos en el Registro Civil simplemente como nacionales por naturalización; mientras que otros lo han sido como nacionales por nacimiento.

El presente Proyecto corrige todas estas anomalías al establecer que los referidos niños adquieren la nacionalidad panameña por nacimiento desde que son adoptados por panameños residentes en el país.

Sabemos que esta solución provocará críticas de ciertas personas aprensivas. A éstas les recordamos que, según nuestras últimas Constituciones (1946, 1972 y 1983), son panameños por nacimiento los hijos de padre y madre norteamericanos nacidos en la antigua Zona del Canal y en la actual “Área Canalera”, aunque no hablen una palabra de español ni sientan afecto alguno por el suelo que los vio nacer, (artículo 9, numeral 1). Asimismo, el hijo nacido en Suecia de una panameña por nacimiento casada con un sueco, es panameño por nacimiento a cualquier edad en que fije su domicilio en Panamá, aunque ignore por completo nuestro idioma y costumbres (artículo 9, numeral 2). De igual modo, si una polaca naturalizada panameña se casa con un canadiense y tiene un hijo nacido y criado en Canadá, éste es panameño por nacimiento, aunque nunca antes haya vivido en nuestro país, si un año después de su mayoría de edad se domicilia en Panamá y manifiesta su deseo de ser panameño (artículo 9, numeral 3). Algunas personas se han opuesto a la vigencia constitucional de modalidades como las anotadas, pero han fracasado reiteradamente. De ahí que las hayamos mantenido, por considerarlas arraigadas en nuestra cultura jurídica.

Podrían citarse otros curiosos ejemplos a este respecto, pero con los señalados basta para demostrar que el nacido en el exterior y adoptado en su primera infancia por panameños residentes en el país, tiene mucho más derecho y presenta muchos menos inconvenientes de ser panameño por nacimiento, que los que se hallan en las otras circunstancias que hemos indicado.

3. Los derechos fundamentales. - El Título III de nuestras últimas Constituciones aparece bajo la denominación, recargada e inexacta, de “Derechos y Deberes Individuales y Sociales”. Mas sucede que en el mencionado Título de dichas Constituciones nunca han existido deberes jurídicos. A su vez, los “deberes” que aparecen en Constituciones de otros países resultan casi inútiles, por su trivialidad. Así tenemos, en algunas de ellas, deberes como los siguientes: “Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud”; “La paz es un deber de obligatorio cumplimiento”... “Todos están en el deber de engrandecer la Patria”; “Toda persona tiene el deber de cumplir la Constitución y las Leyes”; “Toda persona debe actuar de buena fe”; y muchos otros “deberes” carentes, por completo, de carácter normativo.

Mucho nos agradecería que hubiera declaraciones serias y bien logradas de *deberes humanos*, así como hay tantas y tan exaltadas de *derechos humanos*. Pero mientras no se hagan estudios y trabajos sistemáticos y autorizados en materia de *deberes del hombre*, sería poco serio tratar de improvisarlos o pretender que se hallen donde no existen.

El Título en cuestión, como puede verse, ha sido denominado **Derechos Fundamentales**. Éstos abarcan los derechos individuales, los sociales y cualesquiera otros que en el futuro advengan. Por eso hemos dividido el Título en dos Capítulos, con sus correspondientes Secciones.

Muchos cambios de fondo y de forma hemos introducido en este Título, que ha sido y es el más extenso de todas nuestras Constituciones. Sin embargo, hemos de abstenernos de explicar los aludidos cambios, toda vez que hacerlo alargaría extraordinariamente esta Exposición de Motivos, ya de suyo bastante dilatada.

4. Los derechos políticos. - Las variaciones que hemos introducido al Título sobre los Derechos Políticos han sido principalmente de forma.

Aprovechamos esta oportunidad para advertir que hemos reordenado y depurado los numerales de los artículos de este Título que deben estar fraccionados en partes numeradas. La advertencia es valedera para todos los demás artículos del presente Proyecto que se hallan divididos en numerales. Éstos han sido revisados y reagrupados de acuerdo con su importancia y afinidad.

5. El Órgano Legislativo. - Este Proyecto establece dos clases de Diputados: Provinciales y Nacionales. Los primeros son elegidos en cada Provincia, mediante representación proporcional, a razón de uno por cada cincuenta mil habitantes y uno más por un residuo que no baje de veinticinco mil.

El número de Diputados Nacionales ha sido fijado en nueve, número que eventualmente podría aumentar. Estos Diputados serían elegidos por mayoría simple de votos mediante el sufragio de los electores de toda la nación.

Se establece el principio de que los Diputados representan a la Nación y no a las Provincias, Comarcas o Circuitos mediante los cuales fueron elegidos. Es preciso erradicar la perniciosa creencia de que el Diputado representa una Provincia, un Circuito o una Comarca, en cuyo interés debe actuar. Ya en 1945 los doctores Moscote, Alfaro y Chiari, autores del Proyecto de la Constitución de 1946, criticaban esta aberración. Reiteraban, en consecuencia, que el Diputado representaba a la Nación y que sólo en interés de ésta debía actuar.

Luego de detenido estudio, hemos llegado a la convicción de que deben ser mantenidos y defendidos dos principios instituidos por el Acto Constitucional de 1983. Dichos principios consisten en que los Diputados han de ser postulados por partidos políticos y en que éstos pueden revocarles el mandato parlamentario mediante estrictos requisitos.

El llamado principio de la libre postulación enmascara una engañosa libertad. Especialmente en países como el nuestro, con multiplicidad de partidos, las llamadas postulaciones independientes contribuyen a entorpecer, encarecer y desnaturalizar, aún más, los procesos electorales. Por otra parte, es preciso recordar que, antes de 1983, todas nuestras Constituciones permitieron la llamada libre postulación parlamentaria y que jamás, bajo la vigencia de dichas Cartas, fue elegido un solo Diputado independiente. Sin embargo, las postulaciones de esa clase de aspirantes a diputados contribuyó a complicar, falsificar y demorar los resultados de las correspondientes elecciones.

Se mantiene, sin embargo, la libre postulación para los cargos municipales de elección popular, ya que es en el ámbito local donde esta clase de postulación resulta más factible y engendra menos complicaciones y recargos electorales, si es adecuadamente regulada.

En cuanto a la condicionada revocación partidista del mandato parlamentario, es necesario reconocer que ella contribuye a consolidar la decencia, la disciplina y la lealtad de los Diputados. Así lo han expresado eminentes autores de renombre universal. Puede que en la práctica este sistema funcione muy poco en países como el nuestro. Pero aún así, su consagración formal entraña un homenaje jurídico al decoro político y parlamentario.

6. El Órgano Ejecutivo. - Podrá notarse que el presente Proyecto establece el período presidencial y parlamentario de cuatro años. Algunos siguen propugnando el período de cinco años y hasta el de seis. Estos dos períodos fueron ensayados en el pasado régimen, ambos con pésimos resultados. Nuestro pueblo es impaciente y eternamente inconforme. A duras penas soporta un Presidente y una Asamblea por cuatro años. El argumento, invocado por algunos, de que seis o cinco años permiten mayor labor administrativa, es erróneo. Lo cierto es que estos dilatados períodos contribuyen, más bien, a acentuar la impopularidad de los gobernantes y a agravar la inestabilidad política. Por otra parte, es significativo que Colombia y Costa Rica, nuestras dos Naciones colindantes, y las únicas que en Iberoamérica han tenido una inalterada tradición democrática y civilista, consistentemente han mantenido el período cuatrienal.

Con respecto al Presidente y Vicepresidentes de la República, mantenemos la elección por mayoría simple. Pues el sistema de “dos vueltas”, además de ser oneroso, no ha favorecido, en otros países, el principio de governabilidad ni la homogeneidad y el prestigio de los gobiernos.

7. La Administración de Justicia .- En términos generales, el Proyecto mantiene la estructura del actual Órgano Judicial. Sin embargo, después de muchas discusiones, la Comisión designada por el IDEN ha optado por crear una Corte Constitucional, independiente del Órgano Judicial, a la que corresponderá conocer en última instancia de las acciones de **habeas corpus** y de amparo, así como, privativamente, del control de la constitucionalidad en todas sus manifestaciones.

En cuanto al Ministerio Público, se separa de él al Procurador de la Administración. Éste no ejercerá, por tanto, ninguna de las funciones inherentes a dicho Ministerio. En cambio, intervendrá en todos los procesos contencioso-administrativos. Tendrá, asimismo, entre otras importantes funciones, algunas típicas de la institución del Ombudsman. Esto obedece a que no hemos considerado prudente establecer todavía en Panamá la aludida institución. Estimamos que, antes de hacerlo, es conveniente e indicado observar el resultado de ella en países afines al nuestro que la han introducido.

8. Garantías Jurisdiccionales Fundamentales .- Bajo el anotado epígrafe hemos introducido un nuevo Título constitucional. Consta de dos Capítulos. El primero dedicado a la Jurisdicción Constitucional; y el segundo, a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

La creación de este Título se debe al profundo convencimiento de que las solemnes declaraciones de derechos fundamentales (individuales y sociales) de las Constituciones, en la realidad valen muy poco, si no están avaladas por eficaces garantías jurisdiccionales debidamente formuladas. Por eso, no podemos menos que mirar con sospechoso escepticismo algunas

recientes Constituciones que aparecen abarrotadas de redundantes derechos humanos proclamados en convenciones internacionales, pero que enervan el ejercicio de acciones populares para hacer efectivo éstos y los propios derechos fundamentales, pomposamente consagrados en la respectiva Carta.

Hemos aludido a los derechos humanos y es indicado definir nuestra posición con respecto a ellos. Estos derechos, como es sabido, aparecen en convenciones internacionales multilaterales. Algunas tienen carácter universal; mientras que otras son de carácter regional. Los Estados que ratifican cualesquiera de estas convenciones, las convierten, desde luego, en derecho positivo. En Panamá, que las ha ratificado casi todas, tienen valor de Ley formal. Estimamos que con este carácter deben ser cumplidas. Pero es técnicamente contraindicated insertar cláusulas de ellas en la Constitución, como lo vienen haciendo algunos Estados. Pues la inserción de dichas cláusulas en el texto constitucional produce frecuentemente una inadecuada duplicación de preceptos jurídicos y una grave confusión de jerarquía normativa.

9. El Régimen Local. - Este Proyecto transforma sustancialmente el vigente régimen local. Los concejales serán elegidos, para un período de dos años, por los residentes del respectivo Distrito, de acuerdo con la población y recursos de éste. Se mantienen los representantes de corregimientos, pero con funciones circunscritas a su comunidad. Los alcaldes podrán ser elegidos para un período de dos años o nombrados por el Gobernador de la respectiva provincia. Se da, asimismo, cierta prestancia a ésta, a fin de abrir el camino para el eventual establecimiento de Provincias con plena autonomía administrativa.

10. Régimen Económico y Financiero. - Bajo esta denominación, como ya indicamos, se han refundido los Títulos IX (La Hacienda Pública) y X (La Economía Nacional). En el presente Título, que fusiona a ambos, se han descartado varias disposiciones obsoletas, mantenidas por inercia constitucional. Asimismo, han sido eliminadas otras disposiciones superfluas o repetidas.

La Constitución de 1904 contenía un artículo que decía: “No habrá monopolios oficiales”. Este lacónico precepto reflejaba, más que ningún otro, el carácter netamente individualista de aquella Carta. La Constitución de 1941, de corte intervencionista, sustituyó el transcrito artículo por otro, igualmente significativo y breve, que decía: “No habrá monopolios particulares.” Las subsiguientes Constituciones nacionales han mantenido intacto este último precepto. Pero en la actualidad, ninguno de los dos es plenamente valdero. Y es que ya no rigen ni el individualismo a ultranza, manifestado en la Carta de 1904, ni el intervencionismo acentuado, contenido en la del 41. Por eso, en lugar de aquellas disposiciones hemos concebido una según la cual: “La Ley podrá establecer monopolios oficiales, mixtos o particulares, por comprobados motivos de utilidad pública o de interés social”. Este precepto, por supuesto, va seguido de otros, que lo condicionan y atemperan.

En cuanto al Presupuesto Nacional, se conserva, con ciertos cambios, el contenido del Capítulo 2o. del Título IX de la actual Constitución, por considerarlo prudente y equilibrado. Estimamos, por ello, que cualquier ruptura del sabio equilibrio mantenido en dicho Capítulo sería funesto para el orden económico y financiero del País.

11. La función pública.- Con este nombre aparece en el presente Proyecto el actual Título XI denominado “Los Servidores Públicos”. Algunos podrían quizá cuestionar la nueva denominación. Pero la estimamos más técnica y abarcadora. Por otra parte, es la que utilizan las nuevas Constituciones de España, Colombia y el Perú. Las modificaciones que figuran en este Título son primordialmente de técnica formal.

12. La Fuerza Pública.- El Título XI de nuestro proyecto, denominado “La Fuerza Pública” es prácticamente una reproducción del equivalente título de las Reformas Constitucionales de 1992. Lo hemos adoptado porque consideramos que responde a una aspiración nacional. Incluso hay quienes afirman que las aludidas reformas habrían sido aprobadas en el referendo pasado, si sólo hubiesen contenido este Título. Correcta o errada dicha tesis, lo presentamos como está a la discusión y crítica públicas.

13. El Canal de Panamá. - El Título XII del Proyecto recoge la generalizada iniciativa de regular en la Ley Fundamental las cuestiones básicas del Canal, que será panameño dentro de pocos años. Pero hemos circunscrito el contenido de este Título a cuatro artículos. En uno de ellos establecemos que las demás cuestiones referentes a la Autoridad del Canal de Panamá y a éste mismo, serán desarrolladas “mediante una Ley que sólo podrá ser reformada por las dos terceras partes de los miembros de dos legislaturas consecutivas de la Asamblea Nacional”. Esta categoría de Leyes existe en otros Estados, en algunos de los cuales se denominan “Leyes con rango constitucional”.

14. La Reforma de la Constitución. - La cláusula de reforma es una de las cuatro partes esenciales de toda Constitución. Sin embargo, hasta 1983 esta cláusula ha constado en nuestras Constituciones de un solo y deficiente párrafo. Todas ellas mantuvieron el inoperante sistema de dos Asambleas consecutivas para introducir reformas constitucionales. El Acto Constitucional de 1983 agregó el de dos legislaturas consecutivas y un referendo. Pero mantuvo y empeoró el método de las dos asambleas, al establecer que la segunda de ellas no puede cambiar ni una letra del texto que reciba de la primera. Semejante requisito hace inviable este método reformador; y el de las dos legislaturas y un referendo ha demostrado ser también impracticable. Por tanto, la actual Constitución resulta en realidad irreformable mediante los dos métodos por ella establecidos. En el presente Proyecto se corrigen sustancialmente los graves defectos vigentes del método de las dos Asambleas y del de las dos legislaturas, y se agrega el de una Asamblea Constituyente constitucionalmente racionalizada, que es la más correcta forma de instituir dicha clase de Asambleas, a menos que a una nación no le quede otro camino que el de la revolución o el del golpe de Estado.

15. Advertencia Final. - Como indicamos al comienzo de esta Exposición de Motivos, el presente Proyecto de Constitución de la República de Panamá ha sido elaborado por una Comisión del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá (IDEN).

Esta iniciativa del IDEN ha obedecido a la manifiesta necesidad de sustituir la actual Constitución. Como sus establecidos métodos reformativos la hacen virtualmente irreformable, creemos que podría adoptarse alguna fórmula de cambio, en armonía con el vigente ordenamiento jurídico fundamental. Dicha fórmula podría ser una Asamblea Constituyente debidamente regulada u otra fórmula que resulte excquible y eficaz. La convocatoria de la aludida Asamblea o la aplicación de otra fórmula viable, habrá de corresponder al gobierno que se instale el 1º de septiembre de 1994. Pero los actuales Órganos del Estado deben aprobar la primera etapa de una reforma constitucional que, ratificada por la próxima Asamblea Legislativa, permita al nuevo gobierno hacer la mencionada convocatoria. De lo contrario, a dicho gobierno podrá sobrevenirle una grave crisis institucional, de imprevisibles consecuencias.

Por todo ello, es indicado contar con proyectos específicos, previamente elaborados, pues las improvisaciones y las prisas irreflexivas son fatalmente perjudiciales en materia constitucional.

Este Proyecto se presenta, ante todo, como un documento de trabajo. Su finalidad es la de que pueda ser, junto con otros documentos, fuente de consulta y de referencia a quienes, ateniéndose a las particularidades y exigencias de la realidad nacional, habrán de hacer la nueva Carta Fundamental.

Mientras tanto, el IDEN invita a que le sean remitidas observaciones al Proyecto. Muy grato sería que éstas contribuyeran a simplificar el texto.

El presente Proyecto se basa en la situación jurídica y política vigente. De ahí que si esta variara en forma radical, el esquema constitucional podría diferir apreciablemente del que ahora proponemos.

Panamá, 1 de enero de 1994.

PREAMBULO

Los trascendentes cambios políticos, económicos y sociales ocurridos en Panamá, exigen una nueva Constitución del Estado. Esta nueva Carta Fundamental debe registrar con fidelidad las presentes realidades de la Nación panameña y reflejar las actuales transformaciones del Mundo. Pero, para lograr este cometido, no puede ignorar la tradición constitucional ni las prevalecientes convicciones políticas y jurídicas nacionales.

De acuerdo con las consideraciones expresadas, esta Constitución tiene, entre otras finalidades, las siguientes:

Reafirmar la soberanía e integridad jurídicas del Estado, condicionadas por tratados internacionales libremente concertados y por las crecientes tendencias de integración regional.

Regular la nacionalidad de las personas, de acuerdo con principios equitativos y realistas.

Consolidar los derechos fundamentales y asegurar su eficacia mediante la institución de correlativas garantías jurisdiccionales.

Preservar el equilibrio ecológico y los ecosistemas en el ámbito nacional e internacional.

Ampliar los derechos políticos, a fin de instaurar una democracia organizada, pluralista y participativa.

Asegurar la separación racional de los órganos superiores del Estado y su armónica colaboración, para tener un gobierno nacional solidario, que garantice la gobernabilidad y sea a la vez dinámico y responsable.

Propender a la eficaz administración de la justicia, mediante la idoneidad de los funcionarios que la imparten, la especialización de los tribunales y la correspondiente distribución de sus funciones.

Vigorizar el régimen local, propiciando el establecimiento gradual de una adecuada autonomía administrativa y financiera de las Provincias.

Modernizar el régimen económico y financiero de la Nación, a fin de preservar la iniciativa particular y redefinir adecuadamente el papel regulador del Estado.

Regular una ordenada, responsable y eficiente administración pública.

Instituir una fuerza pública especializada y disciplinada que pueda mantener el orden social y proteger a las personas en su vida, honra y bienes.

Sentar las bases necesarias para la eficaz administración del Canal interoceánico, a fin de que la República de Panamá pueda afrontar con éxito el más grande reto histórico de su existencia.

Flexibilizar los métodos de reforma de la Constitución, a fin de garantizar su permanencia y su evolución por vías regulares.

En atención a las expuestas finalidades y al anhelo de promover el bienestar general, la justicia social y la observancia de los derechos humanos, en nuestra calidad de legítimos representantes, en función constituyente, del Pueblo Panameño, e invocando la protección de Dios, acordamos y establecemos la presente Constitución de la República de Panamá.

TITULO I

LA NACION Y EL ESTADO

Capítulo 1º

Disposiciones Generales

Artículo 1.- [El Estado y la forma de gobierno] La Nación panameña está organizada en Estado social de derecho soberano e independiente, denominado República de Panamá. Su forma de gobierno es unitaria, republicana, democrática y representativa.

Artículo 2.- [Soberanía y principio de la separación de los órganos] La soberanía reside en el pueblo. El poder público que de ella emana lo ejerce el Estado, conforme esta Constitución lo establece, primordialmente por medio de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración.

Artículo 3.- [Ámbito territorial] El territorio del Estado panameño comprende la superficie terrestre, el mar territorial, la plataforma continental submarina, el subsuelo y el espacio aéreo comprendido entre Colombia y Costa Rica, de acuerdo con los tratados de límites celebrados por Panamá con esos Estados.

Ninguna parte del territorio panameño podrá ser cedida, traspasada o enajenada, ni siquiera temporalmente, a otro Estado.

Artículo 4.- [División administrativa del territorio] El territorio del Estado panameño se divide administrativamente en Provincias, éstas en Distritos y los Distritos en Corregimientos.

La Ley podrá crear otras divisiones administrativas, sujetas a regímenes especiales.

Artículo 5.- [Integración regional y transferencia de poder] El Estado panameño, mediante Ley, podrá otorgar facultades inherentes al Poder Público a instituciones internacionales destinadas a regir formas especiales de integración regional o hemisférica, sobre bases de equidad e interés común.

Artículo 6.- [Símbolos de la Nación] Son símbolos de la Nación: el himno, la bandera y el escudo de armas, en la forma que determine la Ley.

Artículo 7.- [Idioma Oficial] El español es el idioma oficial de la República de Panamá.

Artículo 8.- [Ámbito de aplicación de la Constitución] Esta Constitución rige en todo el territorio nacional, tanto para nacionales como para extranjeros.

Capítulo 2º

La Nacionalidad

Artículo 9.- [Formas de adquirir la nacionalidad] La nacionalidad panameña se tiene por nacimiento o se adquiere por naturalización.

Artículo 10.- [Panameños por nacimiento] Son panameños por nacimiento:

1. Los nacidos en el territorio del Estado.
2. Los hijos de padre o madre panameños por nacimiento nacidos fuera del territorio del Estado, si aquéllos establecen su domicilio en éste.
3. Los hijos de padre o madre panameños por naturalización nacidos fuera del territorio del Estado, si aquéllos establecen su domicilio en éste y manifiestan su voluntad de acogerse a la nacionalidad panameña a más tardar un año después de alcanzar la mayoría de edad.
4. Los nacidos en el extranjero que hayan sido adoptados antes de cumplir siete años de edad por nacionales panameños domiciliados en el territorio nacional.

Artículo 11.- [Panameños por naturalización] Pueden adquirir la nacionalidad panameña por naturalización:

1. Los extranjeros mayores de edad con tres años consecutivos de residencia en el territorio nacional que tengan hijos nacidos en éste de padre o madre panameños o cónyuge de

nacionalidad panameña, si declaran su voluntad de naturalizarse y comprueban que pueden expresarse en el idioma español y que poseen conocimientos básicos de geografía e historia panameñas.

2. Los extranjeros con cinco años consecutivos de residencia en el territorio nacional si, después de haber alcanzado la mayoría de edad, declaran su voluntad de naturalizarse y comprueban que pueden expresarse en el idioma español y que poseen conocimientos básicos de geografía e historia panameñas.

3. Los nacionales, por nacimiento, de España o de un Estado hispanoamericano, luego de haber cumplido dos años consecutivos de residencia en el territorio panameño.

La Ley regulará la naturalización. El Ejecutivo sólo podrá negar una solicitud de carta de naturaleza por razones de moralidad, seguridad, salubridad, incapacidad física o mental.

Artículo 12.- [Pérdida de la nacionalidad] La nacionalidad panameña por nacimiento no se pierde, pero la renuncia expresa o tácita de ella suspende los derechos ciudadanos.

La nacionalidad panameña por naturalización se perderá por su renuncia expresa o tácita.

La renuncia expresa de la nacionalidad se produce cuando el nacional manifiesta por escrito al Ejecutivo su voluntad de abandonarla; y la tácita, cuando se adquiere voluntariamente otra nacionalidad o cuando se entra al servicio de un Estado enemigo.

Artículo 13.- [Defensa del Estado] Los panameños están obligados a defender la independencia nacional y la integridad territorial del Estado.

Los panameños por naturalización no están obligados a luchar contra su Estado de origen.

Artículo 14.- [Inmigración] La inmigración será regulada por la Ley en atención a los intereses sociales, económicos y demográficos del país.

Artículo 15.- [Restricciones a los extranjeros] Los extranjeros residentes en Panamá disfrutarán de los mismos derechos individuales y sociales que el Estado reconoce a los panameños. Pero la Ley, por motivos de trabajo, salubridad, moralidad, seguridad pública o economía nacional, podrá subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinadas actividades a los extranjeros en general. En caso de guerra o de conformidad con tratados internacionales, se podrá tomar medidas, de acuerdo con la Ley, que afecten a los nacionales de determinados Estados.

Artículo 16.- [Personas jurídicas] La capacidad, el reconocimiento y el régimen de las sociedades y demás personas jurídicas se determinará por la Ley Panameña.

TITULO II

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

Capítulo 1º

Derechos y garantías individuales

Sección 1a.

Principios Generales

Artículo 17.- **[Misión de las autoridades.]** Las autoridades públicas están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales panameños dondequiera que se encuentren y a los extranjeros que se hallen en el territorio nacional; asegurar la efectividad de los derechos individuales y sociales y hacer cumplir la Constitución y la Ley.

Artículo 18.- **[Responsabilidad de los particulares y de los funcionarios].** Los particulares pueden hacer todo lo que la Constitución y la Ley no prohíban. Los servidores públicos, al ejercer sus funciones, sólo pueden hacer lo que la Constitución y la Ley les autorizan.

Artículo 19.- **[Igualdad ante la Ley]** Todas las personas son iguales ante la Ley. No habrá fueros o privilegios personales ni discriminación por motivo de raza, sexo, nacimiento, clase social, religión o ideas políticas.

Artículo 20.- **[Prevalencia del interés público]** El interés privado deberá ceder ante el interés público cuando de la aplicación de una Ley expedida por motivos de utilidad pública o de interés social, resultaren en conflicto los derechos de particulares con la necesidad reconocida por dicha Ley.

Artículo 21.- **[Irretroactividad de la Ley]** Las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto las de orden público o de interés social, cuando en ellas así se exprese.

Artículo 22.- [Debido proceso] Se garantiza el derecho de libre acceso a las autoridades jurisdiccionales para ejercer acciones. Asimismo, en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas se asegura el derecho a un debido procedimiento, previamente establecido por la Ley.

Sección 2a.

Las Garantías Penales

Artículo 23.- [Nullum crimen sine lege] Sólo serán penados los hechos declarados punibles por Ley anterior a su perpetración y exactamente aplicable a los actos imputados.

Artículo 24.- [Retroactividad de la Ley penal] La Ley penal favorable al reo tiene siempre preferencia y retroactividad, aun cuando haya sentencia ejecutoriada.

Artículo 25.- [Derecho a no declarar contra sí mismo] Nadie está obligado a declarar contra sí mismo, su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Artículo 26.- [Non bis in idem] Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, ni más de una vez por la misma causa.

Artículo 27.- [Autorización para sancionar sin juicio previo] Pueden sancionar sin juicio previo, en los casos y dentro de los precisos términos que establezca la Ley:

1. Los servidores públicos que ejerzan mando y jurisdicción, quienes pueden imponer multas o arrestos a cualquiera que los ultraje o les falte el respeto cuando estén desempeñando las funciones de su cargo o con motivo del desempeño de éstas.
2. Los Directores del Servicio de Policía, quienes pueden arrestar a sus subalternos para contener una insubordinación, un motín o por falta disciplinaria.

3. Los capitanes de buques o de aeronaves, quienes cuando están fuera de puerto tienen facultad para preservar el orden a bordo, contener una insubordinación o motín, detener provisionalmente a cualquier delincuente real o presunto.

Artículo 28.- [Obediencia debida] En caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional o legal en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad al servidor público que lo ejecuta. Se exceptúan los miembros de la Fuerza Pública cuando estén en servicio, caso en el cual la responsabilidad recaerá, primordialmente, sobre el superior jerárquico que imparta la orden.

Artículo 29.- [Libertad corporal] Nadie puede ser privado de su libertad, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, expedido de acuerdo con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la Ley. Los ejecutores de dicho mandamiento están obligados a dar copia de éste al interesado.

El delincuente sorprendido in fraganti puede ser aprehendido por cualquier persona y debe ser entregado inmediatamente a la autoridad.

Artículo 30.- [Límite de la detención] Nadie puede estar detenido más de veinticuatro horas sin ser puesto a órdenes de la autoridad competente. Los servidores públicos que violen este precepto tienen como sanción la pérdida inmediata del empleo, sin perjuicio de las penas que para el efecto establezca la Ley.

Artículo 31.- [Derechos del detenido] Toda persona detenida debe ser informada, inmediatamente y en forma que le sea comprensible, de las razones de su detención y de sus correspondientes derechos constitucionales y legales.

La persona acusada de haber cometido delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad en juicio público que le haya asegurado todas las garantías establecidas para su defensa.

Quien sea detenido tiene derecho, desde ese momento, a la asistencia de un abogado en las diligencias policiales y judiciales.

La Ley regulará esta materia.

Artículo 32.- [Prohibición de penas infamantes] No hay pena de muerte, de expatriación, ni de confiscación de bienes, así como no hay prisión, detención o arresto por deudas u obligaciones puramente civiles.

En ningún caso podrá someterse a una persona a tortura, a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 33.- [Asilo y extradición] Se reconoce el derecho de asilo. El Estado no podrá extraditar a sus nacionales por ninguna clase de delitos; ni a los extranjeros por motivos o delitos políticos.

Artículo 34.- [Sistema penitenciario] El sistema penitenciario se funda en principios de seguridad, rehabilitación y defensa social. Se prohíbe la aplicación de medidas que lesionen la integridad física, mental o moral de los reos.

La Ley regulará esta materia.

Sección 3a.

Derechos del individuo en función privada

Artículo 35.- [Libertad de tránsito] Toda persona puede transitar libremente por el territorio nacional y cambiar de domicilio o de residencia, sin más limitaciones que las que impongan las Leyes o los reglamentos de tránsito, fiscales, de salubridad y de inmigración.

Artículo 36.- [Libertad religiosa] Es libre la profesión de todas las religiones, así como el ejercicio de todos los cultos, sin otra limitación que el respeto a la moral y al orden público.

Artículo 37.- [Libertad de profesión] Toda persona es libre de ejercer cualquier profesión u oficio, con sujeción a las normas que establezca la Ley en lo relativo a idoneidad, moralidad, salud pública, previsión y seguridad sociales, sindicación y colegiación. La Ley, además, establecerá el carácter de la colegiación de las profesiones liberales y determinará los casos en que será obligatoria.

No se establecerá impuesto o contribución para el ejercicio de las profesiones liberales, de los oficios y de las artes.

Artículo 38.- [Inviolabilidad de la morada] La residencia o morada es inviolable. Nadie puede entrar a ella, ni al domicilio, sin el consentimiento de su dueño, salvo mandato escrito de autoridad competente y para fines específicos, o para socorrer a víctimas de crímenes o desastres.

Artículo 39.- [Inviolabilidad de las comunicaciones] La correspondencia y demás documentos privados son inviolables y no pueden ser examinados ni retenidos sino por mandato de autoridad competente y para fines específicos, de acuerdo con las formalidades legales. En todo caso se guardará absoluta reserva sobre los asuntos ajenos al objeto del examen o de la retención. El registro de cartas y demás documentos o papeles se practicará siempre en presencia del interesado o de una persona de su familia o, en su defecto, de dos vecinos honorables del mismo lugar.

Las comunicaciones personales, telefónicas o de cualquier naturaleza, así como la transmisión y el procesamiento de todo género de información, son inviolables y no podrán ser interceptadas o grabadas, ni utilizadas como prueba de ninguna clase.

Artículo 40.- [Propiedad privada] Se garantiza la propiedad privada adquirida con arreglo a la Ley por personas naturales o jurídicas.

La propiedad privada implica obligaciones para su dueño, por razón de la función social que ésta debe cumplir.

Artículo 41.- [Expropiación] Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos en la Ley, puede haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa.

Artículo 42.- [Ocupación] En caso de guerra, de grave perturbación del orden público o de interés social urgente, que exijan medidas rápidas, el Ejecutivo puede decretar la ocupación de la propiedad privada.

Cuando fuese factible la devolución del bien ocupado, la ocupación será sólo por el tiempo que duren las circunstancias que la hubieren causado.

El Estado es siempre responsable de los daños y perjuicios causados por la ocupación, y pagará su valor cuando haya cesado el motivo determinante de ésta.

Artículo 43.- [Derecho de autor] Todo autor, artista o inventor goza de la propiedad exclusiva de su obra o invención durante el tiempo y en la forma que establezca la Ley.

Sección 4a.

Derechos del individuo en función pública

Artículo 44.- [Libertad de expresión] Toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa. Pero existen las responsabilidades legales cuando por alguno de estos medios se atente contra la reputación o la honra de las personas o contra la seguridad social o el orden público.

Artículo 45.- [Libertad de reunión] Los habitantes de la República tienen el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas, para fines lícitos. Las manifestaciones o reuniones al aire libre no están sujetas a permiso y sólo se requiere para efectuarlas aviso previo a la respectiva alcaldía, con anticipación de veinticuatro horas.

La autoridad puede tomar medidas de policía para prevenir o reprimir abusos en el ejercicio de este derecho, cuando la forma en que se ejerza cause o pueda causar perturbación del tránsito, alteración del orden público o violación de derechos de tercero.

Artículo 46.- [Libertad de asociación] Es permitido formar toda clase de asociaciones que no sean contrarias a la moral o al orden jurídico. Éstas adquirirán su reconocimiento y personalidad jurídica al ser debidamente inscritas en el Registro especial que determine la Ley. Las asociaciones sólo podrán ser suspendidas en sus actividades o disueltas mediante fundada y motivada resolución judicial.

Las asociaciones religiosas tienen capacidad jurídica y ordenan y administran sus bienes dentro de los límites señalados por la Ley, lo mismo que las demás personas jurídicas.

Artículo 47.- [Derecho de petición] Toda persona tiene derecho a presentar peticiones, consultas y quejas respetuosas a los servidores públicos, por motivos de interés social o particular, y el de obtener resolución dentro de un término de treinta días.

La Ley señalará las sanciones que correspondan a la violación de esta norma.

Sección 5a.

Suspensión de garantías y derechos individuales

Artículo 48.- [Estado de urgencia] En caso de guerra exterior o de perturbación interna que amenace la paz y el orden público, se podrá declarar en estado de urgencia todo el territorio del Estado o parte de él y suspender temporalmente, de modo parcial o total, los efectos de los siguientes artículos de la Constitución: 29 (Libertad corporal); 31 (Derechos del detenido); 38 (Inviolabilidad de la residencia); 39 (Inviolabilidad de las comunicaciones); 35 (Libertad de tránsito); 40 (Inviolabilidad de la propiedad privada); 44 (Libertad de expresión); 45 (Libertad de reunión); y 235 (Habeas Corpus).

El estado de urgencia y la suspensión de los efectos de las citadas normas constitucionales serán declarados por el Órgano Ejecutivo, mediante decreto acordado en Consejo de Gabinete. El Órgano Legislativo deberá conocer de la declaratoria del referido estado, si éste se prolonga por más de diez días, y confirmar o revocar, total o parcialmente, las decisiones adoptadas sobre el particular por el Consejo de Gabinete.

Al cesar la causa que haya motivado la declaratoria del estado de urgencia, lo levantará el Órgano Legislativo, si estuviere reunido; y si no, el Consejo de Gabinete.

Capítulo 2o.

Derechos Sociales

Sección 1a.

La Familia

Artículo 49.- **[Protección de la familia]** El Estado protege la familia, la maternidad y el matrimonio. La Ley determinará lo relativo al estado civil de las personas.

Artículo 50.- **[Igualdad de los cónyuges]** El matrimonio descansa en la igualdad de derechos de los cónyuges y puede ser disuelto de acuerdo con la Ley. La mujer casada no está obligada a usar el apellido de su cónyuge.

Artículo 51.- **[Matrimonio de hecho]** La unión marital, entre personas legalmente capacitadas para contraer matrimonio, mantenida durante cinco años consecutivos en condición de singularidad y estabilidad, surtirá todos los efectos del matrimonio civil.

La Ley regulará el matrimonio de hecho, en salvaguarda del interés de los cónyuges, de sus hijos o herederos y para comprobar la veracidad de los hechos.

Artículo 52.- **[Patria potestad]** La patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que tienen los padres en relación con los hijos.

Los padres están obligados a alimentar, educar y proteger a sus hijos para que obtengan un adecuado desarrollo físico y espiritual; y éstos a respetarlos y asistirlos.

La Ley regulará el ejercicio de la patria potestad y las obligaciones de los hijos mayores de edad para con los padres desvalidos.

Artículo 53.- [Igualdad de los hijos] Todos los hijos son iguales ante la Ley. Ésta reconocerá los derechos de los hijos menores o inválidos y de los padres desvalidos en las sucesiones intestadas.

Artículo 54.- [Filiación y paternidad] Queda abolida toda calificación sobre la naturaleza de la filiación.

La Ley regulará lo concerniente a la filiación y a la paternidad.

Artículo 55.- [Protección de menores, ancianos y desvalidos] El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores y garantizará el derecho de éstos a la alimentación, la salud, la educación y la seguridad y previsión sociales.

También tendrán derecho a similar protección los ancianos y los enfermos desvalidos.

Artículo 56.- [Jurisdicción de menores] La Ley organizará el funcionamiento de la jurisdicción especial de menores.

Los detenidos menores de edad estarán sometidos a un régimen especial de custodia, protección y educación.

Artículo 57.- [Patrimonio familiar] El Estado velará por el mejoramiento social y económico de la familia y organizará el patrimonio familiar determinando la naturaleza y cuantía de los bienes que deban constituirlo, sobre la base de que es inalienable e inembargable.

Artículo 58.- [Institución estatal para la protección familiar] El Estado creará una institución destinada a proteger la familia, la cual tendrá entre sus funciones:

1. Promover la paternidad y la maternidad responsables, mediante la educación familiar.
2. Institucionalizar la educación de los párvulos en centros especializados para atender a aquellos cuyos padres o tutores así lo soliciten.
3. Proteger a los menores y ancianos y custodiar y readaptar socialmente a los abandonados o desamparados, en peligro moral o con desajustes de conducta.

Sección 2a

El Trabajo

Artículo 59.- [Principios de la relación laboral] Las relaciones entre los empresarios o patronos y los asalariados o trabajadores se basarán en la justicia y la concertación sociales.

Artículo 60.- [Equidad salarial] A trabajo igual, en idénticas condiciones, corresponde siempre igual salario o sueldo, sin discriminación alguna.

Artículo 61.- [Salario mínimo] A todo empleado público o privado se le garantiza un sueldo o salario mínimo.

En los trabajos por tarea o pieza, debe quedar asegurado el salario mínimo por jornada.

El sueldo o salario mínimo es inembargable, salvo para obligaciones alimentarias en la forma que establezca la Ley.

Artículo 62.- [Salarios por profesión] La Ley determinará el método para fijar salarios o sueldos mínimos por profesión u oficio, atendiendo, entre otras cosas, a las particularidades de cada región y actividad económica.

Artículo 63.- [Ajuste salarial] La Ley establecerá la manera de ajustar periódicamente el sueldo o salario a todo empleado o trabajador, a fin de garantizarle la suficiencia económica. Dicha actualización se aplicará también a los pensionados o jubilados.

Artículo 64.- [**Inembargabilidad de los instrumentos de labor**] Los instrumentos de labor, las herramientas, utensilios o equipos inherentes al ejercicio, desempeño o desarrollo de todo arte, profesión u oficio son inembargables.

Artículo 65.- [**Jornada máxima de trabajo**] La semana laboral no excederá de cuarenta y ocho horas. La jornada máxima de trabajo diurno será de ocho horas y la nocturna de siete. Las horas extraordinarias serán remuneradas con recargo.

La jornada máxima podrá ser reducida hasta seis horas diarias para los mayores de catorce años y menores de dieciocho.

Artículo 66.- [**Descanso semanal y vacaciones**] Todo trabajador tendrá derecho al descanso semanal y a vacaciones anuales remuneradas.

La Ley podrá establecer el descanso semanal remunerado, de acuerdo con las condiciones económicas y sociales del país y en atención al beneficio de los trabajadores.

Artículo 67.- [**Estabilidad laboral**] Ningún trabajador podrá ser despedido sin justa causa y sin las formalidades que establezca la Ley. Esta señalará las causas justas para el despido, sus excepciones y la indemnización correspondiente.

Artículo 68.- [**Derecho de sindicalización**] Se reconoce el derecho de sindicalización a los empleadores, asalariados y profesionales de todas clases para los fines de su actividad económica y social.

Las directivas de los sindicatos estarán integradas exclusivamente por panameños.

La Ley regulará lo concerniente a los sindicatos, cuya personalidad jurídica quedará determinada por la inscripción.

Sólo se podrá disolver un sindicato cuando éste se aparte de sus fines y así lo declare un tribunal competente, mediante sentencia firme.

Artículo 69.- [Derecho a huelga y a cierre] Se reconoce el derecho de huelga y el de cierre patronal. La Ley reglamentará el ejercicio de ambos y podrá someterlo a restricciones o prohibiciones especiales en los servicios públicos.

Artículo 70.- [Irrenunciabilidad de los derechos laborales] Son nulas y, por tanto, no obligan a los contratantes, aunque se expresen en un convenio de trabajo o en otro pacto cualquiera, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, adulteración o dejación de algún derecho reconocido a favor del trabajador.

La Ley regulará todo lo relativo al contrato de trabajo.

Artículo 71.- [Fuero de maternidad] Se protege la maternidad de la mujer trabajadora, cuyas condiciones especiales de trabajo serán reguladas por la Ley. La que esté en estado de gravidez no podrá ser separada de su empleo público o particular por esta causa. Durante las seis semanas precedentes al parto y las ocho que le siguen, gozará de descanso forzoso, retribuido del mismo modo que su trabajo y conservará el empleo y todo los derechos correspondientes a éste. Al reincorporarse a su empleo, no podrá ser despedida por el término de un año, salvo en casos especiales previstos en la Ley.

Artículo 72.- [Prohibición del trabajo de menores] Se prohíbe el trabajo a los menores de catorce años y el nocturno a los menores de dieciséis, salvo las excepciones que establezca la Ley.

Artículo 73.- [Contratación de extranjeros] Se prohíbe la contratación de trabajadores extranjeros que puedan rebajar las condiciones de trabajo o las normas de vida del trabajador nacional. La Ley regulará la contratación de Gerentes, Directores Administrativos y Ejecutivos, técnicos y profesionales extranjeros para servicios públicos y privados, asegurando siempre los derechos de los panameños y de acuerdo con el interés nacional.

Artículo 74.- [Capacitación laboral] El Estado y la empresa privada impartirán enseñanza profesional gratuita al trabajador. La Ley regulará la forma de prestar este servicio.

Artículo 75.- [Capacitación sindical] Se establece la capacitación sindical. Será impartida exclusivamente por el Estado y las organizaciones sindicales panameñas.

Artículo 76.- [Desempleo y participación de utilidades] El Estado elaborará programas económicos encaminados a disminuir el desempleo y asegurar a todo trabajador las condiciones indispensables para una existencia decorosa. Promoverá, asimismo, la participación de los trabajadores en los beneficios de las empresas.

Artículo 77.- [Jurisdicción del trabajo] Todas las controversias que originen las relaciones entre el capital y el trabajo quedan sometidas a la jurisdicción del trabajo, la cual sólo será ejercida por jueces y magistrados idóneos y de carrera, conforme a lo dispuesto por la Ley.

El nombramiento de los magistrados de los tribunales colegiados de trabajo corresponderá a la Corte Suprema de Justicia, con sujeción a la carrera judicial.

Artículo 78.- [Derechos mínimos de los trabajadores] Los derechos y garantías establecidos en esta sección a favor de los trabajadores, serán considerados como mínimos.

Sección 3a.

La Cultura Nacional

Artículo 79.- [Promoción del patrimonio cultural] El Estado promoverá, desarrollará y custodiará el patrimonio cultural.

Artículo 80.- [Salvaguarda del idioma] El Estado velará por la defensa, difusión y pureza del idioma español.

Las lenguas aborígenes serán objeto de estudio y divulgación.

Artículo 81.- [Patrimonio histórico] El patrimonio histórico de la Nación lo constituyen los sitios y objetos arqueológicos, los documentos y monumentos históricos y otros bienes que sean testimonio del pasado panameño. El Estado decretará la expropiación de los que se encuentren en manos de particulares. La Ley regulará lo concerniente a su custodia y tomará las providencias necesarias para conciliarla con la factibilidad de programas de carácter comercial, turístico, industrial, ambiental y de orden tecnológico.

Artículo 82.- [Tradiciones folklóricas] El Estado reconoce que las tradiciones folklóricas constituyen parte medular de la cultura nacional y por tanto promoverá su estudio, conservación y divulgación.

Artículo 83.- [Identidad étnica] El Estado reconoce la identidad étnica de las comunidades indígenas nacionales y realizará programas para promover el desarrollo integral de éstas. Además, creará una institución para el estudio de sus culturas.

Artículo 84.- [Promoción de la ciencia y la tecnología] Habrá un sistema nacional responsable de promover el desarrollo de la ciencia y la tecnología.

Artículo 85.- [Promoción del arte] El Estado promoverá el desarrollo del arte en todas sus manifestaciones, mediante instituciones académicas, de divulgación y de recreación. Asimismo estimulará y patrocinará a los artistas nacionales divulgando sus obras por medio de sistemas de orientación cultural.

Artículo 86.- [Promoción del deporte] El Estado fomentará el desarrollo de la cultura física mediante instituciones deportivas, de enseñanza y de recreación que serán reguladas por la Ley.

Artículo 87.- [Medios de comunicación social] Los medios de comunicación social son instrumentos de información, educación, recreación y difusión cultural y científica. La

publicidad y la propaganda no deben ser contrarias a la salud, la moral, la educación, la formación cultural de la sociedad y la conciencia nacional. La Ley regulará su funcionamiento.

Sección 4a.

La Educación

Artículo 88.- [Derecho a la educación] Todos tienen el derecho a la educación. El Estado organiza y dirige el servicio público de la educación nacional y garantiza a los padres de familia el derecho de participar en el proceso educativo de sus hijos.

Artículo 89.- [Principios de la educación] La educación es democrática; se basa en la ciencia y en principios de solidaridad humana y justicia social.

Artículo 90.- [Fines de la educación] La educación debe atender el desarrollo armónico e integral del educando y fomentar en el estudiante una conciencia nacional.

Artículo 91.- [Libertad de enseñanza] Se garantiza la libertad de enseñanza. El Estado podrá intervenir en los centros docentes particulares para que se cumplan en ellos los fines nacionales y sociales de la cultura y la formación intelectual, moral, cívica y física de los educandos.

Artículo 92.- [Libertad de investigación y de cátedra] Se reconoce la libertad de investigación y de cátedra. Ninguna exime de la observancia del orden constitucional; y la de cátedra, del cumplimiento de los programas de enseñanza.

Artículo 93.- [Idioma oficial en la enseñanza] La educación se impartirá en el idioma oficial. La Ley, por motivos especiales, podrá establecer excepciones.

Artículo 94.- [Naturaleza de la educación] Toda educación es pública y puede ser oficial o particular. La educación oficial es la que imparte directamente el Estado y la particular es la impartida por personas o entidades privadas.

Los establecimientos de enseñanza, sean oficiales o particulares, están abiertos a todas las personas, sin distinción de raza, posición social, ideas políticas, religión o la naturaleza de la unión de sus progenitores o guardadores.

La Ley regulará tanto la educación oficial como la particular.

Artículo 95.- [Obligatoriedad y gratuidad de la educación] Es obligatorio el primer nivel de enseñanza.

La educación oficial es gratuita en todos los niveles preuniversitarios, sin perjuicio del pago de matrícula en los niveles no obligatorios.

Artículo 96.- [Material didáctico] El Estado proporcionará al educando los medios y útiles necesarios para su aprendizaje.

Artículo 97.- [Incentivos económicos] La Ley podrá crear incentivos económicos en beneficio de la educación.

El Estado proporcionará los recursos adecuados para otorgar becas, auxilios u otras prestaciones económicas a los estudiantes que lo merezcan.

Artículo 98.- [Planes y programas de enseñanza] Los planes de estudios, los programas de enseñanza, así como los niveles educativos serán elaborados y aprobados por la dependencia estatal que señale la Ley.

Artículo 99.- [Reconocimiento de títulos académicos] Sólo se reconocen los títulos académicos y profesionales expedidos por el Estado o autorizados por éste, de acuerdo con la Ley.

Artículo 100.- [Consejo Nacional de Universidades] Habrá un Consejo Nacional de Universidades Oficiales presidido por la Universidad de Panamá y formado por la Universidad Tecnológica de Panamá y las demás Universidades oficiales que autorice la Ley. Corresponderá a este Consejo recomendar la creación y regular el funcionamiento de universidades y otros centros de educación superior particulares, así como supervisarlas para garantizar la calidad de los títulos que expidan. Revalidará, además, los títulos otorgados por universidades extranjeras.

La Ley regulará esta materia.

Artículo 101.- [Carácter y recursos de las universidades oficiales] Las universidades oficiales son autónomas. Se les reconoce personalidad jurídica, patrimonio propio y derecho a administrarlo. El Estado las dotará de lo necesario para su instalación, funcionamiento y desarrollo, así como del patrimonio y de los medios para acrecentarlo.

Artículo 102.- [Organización de las Universidades oficiales] Las universidades oficiales organizarán sus estudios, designarán y separarán su personal, de acuerdo con la Ley y Estatuto Orgánicos.

Los requisitos de la educación universitaria impartida en los Centros Regionales serán iguales a los de la sede principal de las respectivas universidades.

Artículo 103.- [Educación especial] La excepcionalidad del estudiante, en todas sus manifestaciones, será atendida mediante educación especial.

Artículo 104.- [Educación laboral] Se establece la educación laboral, que tendrá programas de educación básica y capacitación especial.

Artículo 105.- [Programas para la integración indígena] El Estado desarrollará programas de educación y promoción para los grupos indígenas, a fin de lograr su integración a la vida nacional.

Artículo 106.- [Enseñanza de la religión] Se podrá enseñar la religión católica en las escuelas oficiales, pero su aprendizaje y la asistencia a actos de cultos religiosos no serán obligatorios, cuando así lo soliciten los padres o tutores.

Sección 5a.

Salud, Seguridad y Asistencia Sociales

Artículo 107.- [Derecho a la salud] Toda persona tiene derecho a la promoción, protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud y la obligación de conservarla, entendida ésta como el completo bienestar físico, mental y social.

Artículo 108.- [Derecho a subsidio mínimo] Toda persona tiene derecho a la seguridad de sus medios económicos de subsistencia, en caso de incapacidad para trabajar o para obtener trabajo retribuido.

Artículo 109.- [Participación comunitaria] Las comunidades participarán en la planificación, ejecución y evaluación de los programas de salud.

Artículo 110.- [Protección estatal de la salud] Es función esencial del Estado velar por la salud de la población. Le corresponde primordialmente el desarrollo de las siguientes actividades, integrando las funciones de prevención, curación y rehabilitación:

1. Desarrollar una política nacional de alimentación y nutrición.
2. Difundir el conocimiento de los deberes y derechos individuales y sociales en materia de salud personal y ambiental.
3. Garantizar la atención integral del niño y del adolescente en todas sus fases.
4. Combatir las enfermedades transmisibles mediante el saneamiento ambiental, el desarrollo de la disponibilidad de agua potable y la adopción de medidas de inmunización, profilaxis y tratamiento, proporcionadas colectiva e individualmente, a toda la población.

5. Crear, de acuerdo con las necesidades de cada región, establecimientos en los cuales se presten servicios de salud integral y suministren medicamentos a toda la población. Estos servicios de salud y medicamentos serán proporcionados gratuitamente a quienes carezcan de recursos económicos.

6. Regular y vigilar el cumplimiento de las condiciones de salud y la seguridad que deban reunir los lugares de trabajo, estableciendo una política nacional de medicina e higiene industrial y laboral.

Artículo 111.- [Política de vivienda] El Estado establecerá una política nacional para facilitar vivienda adecuada a toda la población, especialmente a los sectores de menor ingreso.

Artículo 112.- [Política de medicamentos] El Estado deberá desarrollar una política nacional de medicamentos que promueva la producción, disponibilidad, accesibilidad, calidad y control de los medicamentos para toda la población del país.

Artículo 113.- [Instituciones de previsión y seguridad social] Una o más instituciones de derecho público, autónomas o descentralizadas, tendrán a su cargo los servicios de previsión y seguridad social.

Los fondos y reservas de dichas instituciones serán aportados, obligatoriamente, por el Estado, los empleadores y los asegurados; y no podrán ser destinados a fines distintos a los de su creación.

Artículo 114.- [Fondos complementarios para jubilaciones] El Estado podrá crear fondos complementarios con el aporte y participación de los trabajadores de las empresas públicas y privadas, a fin de mejorar los servicios de seguridad social en materia de jubilaciones. La Ley regulará esta materia.

Artículo 115.- [Compensación de servicios] Los servicios prestados por el gobierno central y por las instituciones autónomas o semiautónomas serán complementados y

compensados, recíproca y equitativamente, en la forma que determine la Ley para que no se perjudiquen los fondos y reservas que correspondan a algunas de ellas.

Artículo 116.- [Instituciones de asistencia y previsión sociales] El Estado creará establecimientos de asistencia y previsión sociales. Son tareas fundamentales de éstos la rehabilitación económica y social de los sectores dependientes o carentes de recursos y la atención de los mentalmente incapaces, de los enfermos crónicos, de los inválidos indigentes y de los grupos que no hayan sido incorporados al sistema de seguridad social.

Sección 6a.

La Ecología

Artículo 117.- [Preservación del medio ambiente] El Estado garantizará un ambiente sano y libre de contaminación, que preserve toda manifestación de vida.

Artículo 118.- [Límites ecológicos del desarrollo] El desarrollo social y económico del país no debe afectar irracionalmente el equilibrio ecológico ni los ecosistemas.

Artículo 119.- [Recursos renovables y no renovables] El Estado garantizará la utilización y el aprovechamiento racionales de la fauna, a fin de evitar su depredación; así como asegurará la preservación y renovación de flora, tierras y aguas.

El aprovechamiento de los recursos naturales no renovables será regulado por la Ley para evitar perjuicios sociales, económicos y ambientales.

Artículo 120.- [Sustancias y productos peligrosos] Se prohíbe la fabricación, el montaje, la importación, la comercialización, la posesión y el uso de armas nucleares, químicas y biológicas, así como la introducción al país de residuos tóxicos. La Ley podrá extender esta prohibición a otros elementos, sustancias o productos peligrosos.

Artículo 121.- [Delito ecológico] El delito ecológico y su sanción serán definidos por la Ley.

Sección 7a.

El Agro

Artículo 122.- [Utilización óptima de la tierra] El Estado fomentará el aprovechamiento, utilización y conservación óptimos de la tierra y velará por su distribución racional. Asimismo, evitará que haya tierras incultas, improductivas u ociosas.

Artículo 123.- [Reservas indígenas] El Estado reservará tierras, sometidas a un régimen de propiedad colectiva, para las comunidades indígenas. La Ley regulará esta materia.

Artículo 124.- [Relaciones de trabajo en el agro] Las relaciones de trabajo en el agro tenderán a obtener una máxima productividad y una justa distribución de sus beneficios.

Artículo 125.- [Promoción del sector agrario] Para fomentar la organización, capacitación, protección y tecnificación del sector agrario, el Estado desarrollará las siguientes actividades:

1. Promoverá el establecimiento de medios de comunicación, el estudio agrológico y la asistencia técnica.
2. Dotará a los campesinos de las tierras de labor necesarias y regulará el uso de las aguas.
3. Organizará el financiamiento de la actividad agropecuaria dando preferencia al pequeño y mediano productor.
4. Tomará medidas para asegurar mercados estables y precios equitativos de los productos.
5. Promoverá la creación de entidades, corporaciones y cooperativas de producción, industrialización, distribución y consumo.

Artículo 126.- [Jurisdicción agraria] La jurisdicción agraria será establecida por la Ley, la cual organizará sus tribunales.

TITULO III

LOS DERECHOS POLITICOS

Capítulo 1o.

La Ciudadanía

Artículo 127.- **[Ciudadanos]** Son ciudadanos todos los panameños mayores de dieciocho años.

Artículo 128.- **[Ejercicio de los derechos políticos]** Los derechos políticos y la capacidad para ejercer cargos públicos con mando y jurisdicción, se reservan a los ciudadanos panameños.

Artículo 129.- **[Suspensión de los derechos ciudadanos]** El ejercicio de los derechos ciudadanos se suspende:

1. Por la causa establecida en el artículo 12 de esta Constitución.
2. Por pena conforme a la Ley.

La Ley regulará la suspensión y reanudación de los derechos ciudadanos.

Capítulo 2o.

El Sufragio

Artículo 130.- **[Sufragio]** El sufragio es un derecho y un deber cívico de los ciudadanos. Es libre, igual, universal, secreto y directo.

Artículo 131.- **[Condiciones de elegibilidad]** Los funcionarios que ejerzan autoridad en todo el territorio nacional o en parte de éste y aspiren a ocupar un cargo de elección popular nacional o local, deberán renunciar al que ejercen, por lo menos seis meses antes de la respectiva elección.

Los Diputados que aspiren a reelegirse deberán renunciar a su curul, a más tardar seis meses antes de la correspondiente elección.

La Ley detallará los cargos a que se refiere el primer párrafo de este artículo y establecerá todas las demás condiciones de elegibilidad de los funcionarios para ser candidatos a cargo de elección popular.

Artículo 132.- [Ministros de cultos religiosos] Los ministros de los cultos religiosos no podrán participar en la política partidista, salvo para emitir el voto en elecciones o consultas populares; y, además de las funciones inherentes a su misión, sólo podrán ejercer cargos públicos relacionados con la asistencia social, la educación o la investigación científica.

Artículo 133.- [Obligaciones y prohibiciones electorales] Las autoridades están obligadas a garantizar la libertad y honradez del sufragio.

Se prohíben:

1. El apoyo oficial directo o indirecto a candidatos a puesto de elección popular.
2. Las actividades de propaganda y afiliación partidistas en las oficinas públicas.
3. La exacción de cuotas o contribuciones a los empleados públicos para fines políticos, aun a pretexto de que son voluntarias.
4. Cualquier acto que impida o dificulte a un ciudadano obtener, guardar o presentar personalmente su cédula de identidad.

Artículo 134.- [Plebiscitos y referendos] La Asamblea Nacional, mediante Ley aprobada por mayoría absoluta, y el Órgano Ejecutivo, por Decreto acordado unánimemente en Consejo de Gabinete, podrán convocar plebiscitos nacionales para consultar o decidir asuntos de especial importancia. De igual manera, podrán someter a referendos nacionales proyectos para reformar o establecer específicos preceptos constitucionales, así como proyectos de Leyes importantes y de otros actos jurídicos trascendentes de carácter general.

Artículo 135.- [Delitos electorales] Los delitos electorales y sus sanciones serán determinados por la Ley.

Capítulo 3o.

Los Partidos Políticos

Artículo 136.- [Partidos políticos] Los partidos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumentos fundamentales de la democracia representativa.

El reconocimiento y la subsistencia de los partidos políticos, serán regulados por la Ley. Ésta podrá exigir para el mantenimiento de aquéllos, entre el cinco y diez por ciento de los votos válidos emitidos en las respectivas elecciones presidenciales o parlamentarias, según la votación más favorable al partido.

Artículo 137.- [Ilícitud de partidos políticos] No es lícita la formación de partidos fundados en el sexo, la raza, la religión o que tiendan a destruir la forma democrática de Gobierno.

Artículo 138.- [Acceso a la información oficial] Los partidos políticos tendrán derecho a recabar y recibir informes de las autoridades públicas respecto a materias que directamente les conciernan, excepto sobre relaciones diplomáticas reservadas.

Artículo 139.- [Financiamiento electoral] El Estado podrá contribuir a los gastos de los partidos políticos en los procesos electorales. Los gastos de los partidos en este caso serán fiscalizados por el Estado.

Concederá, asimismo, a los partidos el uso de los medios de comunicación social administrados por el gobierno central.

La Ley regulará esta materia para asegurar la proporcionalidad de las contribuciones y concesiones aludidas.

Capítulo 4o.

El Tribunal Electoral

Artículo 140.- [Autonomía del Tribunal Electoral] Establécese un Tribunal Electoral autónomo, con personalidad jurídica, patrimonio propio y derecho a administrarlo, con el fin de garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio.

Este Tribunal tendrá jurisdicción en todo el territorio del Estado.

Artículo 141.- [Composición del Tribunal Electoral] El Tribunal Electoral estará integrado por tres Magistrados, que han de reunir los mismos requisitos exigidos para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Serán designados para un periodo de diez años. Uno por el Órgano Legislativo, otro por el Ejecutivo y el tercero por la Corte Suprema de Justicia, entre personas que no formen parte de la autoridad nominadora. Cada Magistrado tendrá dos suplentes designados en la misma forma que aquél, quienes no podrán ser funcionarios del Tribunal Electoral.

Artículo 142.- [Atribuciones del Tribunal Electoral] El Tribunal Electoral tendrá, además de las que le confiera la Ley, las siguientes atribuciones que ejercerá privativamente, excepto las consignadas en los numerales 8 y 9:

1. Reglamentar la Ley Electoral, interpretarla, aplicarla y conocer de las controversias que ella origine.
2. Sancionar las faltas y delitos contra la libertad y pureza del sufragio, de conformidad con la Ley.
3. Organizar, dirigir y fiscalizar el padrón electoral y resolver las quejas, denuncias y controversias con respecto a éste.

4. Nombrar los miembros de las corporaciones electorales, en las cuales se deberá garantizar la representación de los partidos políticos legalmente constituidos.

5. Dictar, con respecto a la Fuerza Pública, las medidas pertinentes para que los procesos electorales o consultas populares se desarrollen de conformidad con los derechos y garantías fundamentales. Estas medidas las hará cumplir el Tribunal por sí o por medio de los delegados electorales que designe.

6. Inscribir todos los hechos y actos jurídicos relacionados con el estado civil de las personas.

7. Expedir la cédula de identidad personal.

8. Levantar el Censo Electoral.

9. Tramitar los expedientes de las solicitudes de naturalización.

La Ley regulará esta materia.

Artículo 143.- [Responsabilidades de los Magistrados Electorales] Los Magistrados del Tribunal Electoral son responsables ante la Corte Suprema de Justicia por las faltas o delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones con las sanciones que determine la Ley; y les son aplicables los artículos 211, 212, 213, 214, 215 y 216 de esta Constitución.

Artículo 144.- [Efectos de las decisiones jurisdiccionales del Tribunal Electoral] Las decisiones jurisdiccionales del Tribunal Electoral únicamente son recurribles ante él y, una vez cumplidos los trámites de Ley, serán definitivas, irrevocables y obligatorias. Se exceptúa lo referente a la acción de inconstitucionalidad.

Capítulo 5o.

La Fiscalía Electoral

Artículo 145.- [Carácter de la fiscalía electoral] La Fiscalía Electoral es una autoridad de instrucción, independiente y coadyuvante del Tribunal Electoral.

Artículo 146.- [Designación del fiscal electoral] El Órgano Ejecutivo designará al Fiscal Electoral por un período de diez años; su designación deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional.

El Fiscal Electoral debe reunir los mismos requisitos exigidos para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, tiene iguales restricciones y le son aplicables los artículos 211, 212, 213, 214, 215 y 216 de esta Constitución.

El Fiscal Electoral tendrá dos suplentes que serán nombrados en la misma forma, por igual período y deberán cumplir con los mismos requisitos.

Artículo 147.- [Funciones del fiscal electoral] El Fiscal Electoral tendrá, además de las que establezca la Ley, las siguientes funciones:

1. Perseguir los delitos y faltas electorales.
2. Vigilar la conducta oficial de los funcionarios respecto a la materia electoral.
3. Salvaguardar los derechos políticos de los ciudadanos.

El Fiscal Electoral es responsable ante la Corte Suprema de Justicia por las faltas o delitos que cometa en el ejercicio de sus funciones, con las sanciones que determine la Ley.

TITULO IV

EL ORGANO LEGISLATIVO

Capítulo 1o.

La Asamblea Nacional

Artículo 148.- [Carácter de la Asamblea Nacional] El Órgano Legislativo estará constituido por una corporación denominada Asamblea Nacional, cuyos miembros se denominarán Diputados y serán elegidos mediante postulación partidista y votación popular directa.

Artículo 149.- [Composición de la Asamblea Nacional] La Asamblea Nacional estará compuesta por Diputados Provinciales y Nacionales, que serán elegidos por un período de cuatro años, en la fecha que establezca la Ley.

A cada Diputado corresponde un Suplente, elegido conjuntamente y el mismo día que aquél, quien lo reemplazará en sus ausencias.

El número total de Diputados, incluyendo los nacionales y los provinciales, no excederá de setenta.

Artículo 150.- [Requisitos del Diputado] Para ser Diputado se requiere:

1. Ser panameño por nacimiento, o por naturalización con quince o más años de residencia en el país.
2. Ser ciudadano en ejercicio.
3. Haber cumplido, en la fecha de la elección, por lo menos treinta años de edad, si aspira a ser Diputado provincial, y treinta y cinco, si aspira a ser Diputado nacional.

Artículo 151.- [Diputados Nacionales] Los Diputados Nacionales serán nueve; elegidos por mayoría simple de votos mediante el sufragio de los electores de toda la Nación. Serán postulados sin atender a la residencia o procedencia de los candidatos y deberán ser

conocidos en el ámbito nacional. Las candidaturas de estos Diputados no deberán ser prorrateadas o distribuidas por regiones, provincias, comarcas u otras circunscripciones administrativas, electorales, geográficas o demográficas.

Artículo 152.- [Diputados provinciales] Los Diputados Provinciales son los que resulten elegidos en cada Provincia, mediante representación proporcional, a razón de uno por cada cincuenta mil habitantes y uno más por un residuo que no baje de veinticinco mil, de acuerdo con el censo nacional de población inmediatamente anterior al respectivo período electoral. En las Provincias con más de doscientos mil habitantes, la Ley establecerá circuitos electorales plurinominales.

Las comarcas indígenas, cuya población exceda de veinticinco mil habitantes, elegirán un Diputado y su Suplente.

La Ley, luego de cada censo nacional, establecerá una mayor base de población para elegir Diputados en las Provincias y en las Comarcas Indígenas.

Artículo 153.- [Status de los Diputados] Los Diputados representan a la Nación, en cuyo interés han de actuar, orientados por los programas de sus respectivos partidos.

Artículo 154.- [Revocatoria de mandato] Los partidos políticos podrán revocar el mandato de los Diputados provinciales principales y suplentes que sean miembros suyos y que hayan postulado. Para ello cumplirán los siguientes requisitos y formalidades:

1. Las causales de revocatoria y el procedimiento aplicable deberán referirse a la actuación del Diputado como tal y estar previstos en los Estatutos del Partido.

2. Las causales deberán referirse a violaciones graves de los Estatutos o del Programa ideológico o político del Partido y haber sido aprobadas mediante resolución dictada por el Tribunal Electoral con anterioridad a la postulación del candidato.

El Tribunal Electoral velará por que las causales de revocatoria sean específicas y por que las de los diferentes partidos guarden la mayor similitud.

3. El afectado tendrá derecho a ser oído y a defenderse en dos instancias, dentro de su Partido.

4. La decisión del Partido, que adopte la revocatoria del mandato del Diputado, estará sujeta a recurso del que conocerá privativamente el Tribunal Electoral, con efecto suspensivo.

Los partidos políticos también podrán revocar, sin que haya lugar a recurso, el mandato de los Diputados o Suplentes de éstos, que renuncien de su partido.

Artículo 155.- [Irresponsabilidad de los Diputados] Los Diputados no son legalmente responsables por las opiniones o votos que emitan en el ejercicio de su cargo.

Artículo 156.- [Inmunidad] Los Diputados gozarán de inmunidad desde el día en que se inicia cada legislatura ordinaria, hasta la fecha en que ésta concluye. Durante dicho período no podrán ser perseguidos ni detenidos por causas penales o policiales, sin previa autorización de la Asamblea Nacional.

Esta inmunidad no surte efecto en caso de flagrante delito, o cuando el Diputado renuncie a ella, o si es suspendida por la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional.

Artículo 157.- [Incompatibilidad de los Diputados] Los Diputados no podrán tener ningún empleo remunerado. Si lo tuvieran, perderán la curul. Sin embargo, la designación del Diputado en un alto cargo político, administrativo o diplomático, sólo producirá vacante temporal.

Artículo 158.- [Prohibiciones a los Diputados] Los Diputados no podrán, por sí mismos, ni por interpuestas personas, celebrar contrato alguno con autoridades, instituciones, empresas o dependencias del Estado, o vinculadas con él, ni admitir de nadie poder para gestionar negocios ante dichas autoridades, instituciones, empresas o dependencias, salvo en los casos siguientes:

1. Cuando el Diputado haga uso personal o profesional de servicios públicos o efectúe operaciones corrientes de la misma índole con instituciones o empresas estatales.

2. Cuando se trate de contratos celebrados con cualesquiera de las autoridades o entidades mencionadas en este artículo, mediante licitación, por sociedades que no tengan el

carácter de anónimas y de las cuales sea socio un Diputado, si la participación de éste en aquéllas es de fecha anterior a su elección para el referido cargo.

3. Cuando, mediante licitación o sin ella, celebren contratos con dichas autoridades o entidades, sociedades anónimas de las cuales no pertenezca un total de más de veinte por ciento de acciones del capital social, a uno o más Diputados.

4. Cuando la Asamblea esté en receso y el Diputado actúe en ejercicio de la profesión de abogado.

En todos estos casos, el Diputado carecerá de inmunidad con respecto a tales contratos, actuaciones o gestiones.

Artículo 159.- [Emolumentos de los Diputados] Los Diputados devengarán los emolumentos que señale la Ley, los cuales serán imputables al Tesoro Nacional. El aumento de cualquier clase de emolumento de los Diputados, sólo será efectivo después de terminar el período de la Asamblea Nacional que lo hubiere aprobado.

Artículo 160.- [Legislaturas ordinarias y extraordinarias] La Asamblea Nacional se reunirá, sin necesidad de convocatoria, en dos legislaturas ordinarias anuales de cuatro meses cada una. Estas se extenderán, respectivamente, del primero de septiembre al treinta y uno de diciembre y del primero de marzo al treinta de junio.

La Asamblea Nacional también se reunirá en legislatura extraordinaria, cuando sea convocada por el Órgano Ejecutivo y durante el tiempo que éste señale, para conocer exclusivamente de los asuntos que dicho Órgano someta a su consideración.

Artículo 161.- [Sesiones Judiciales] La Asamblea Nacional podrá reunirse, por derecho propio, para ejercer funciones jurisdiccionales.

Se denominarán sesiones judiciales las dedicadas al ejercicio de las atribuciones jurisdiccionales de la Asamblea Nacional, sea cual fuere el tiempo en que se celebren y la forma como la Asamblea haya sido convocada.

La celebración de dichas sesiones no prolongará ni cambiará el período de cualquier

coincidente legislatura ordinaria; y sólo terminará cuando la Asamblea haya decidido la causa **sub judice**.

Capítulo 2o.

Funcionamiento de la Asamblea Nacional

Artículo 162.- [Funciones legislativas] Las funciones legislativas de la Asamblea Nacional consisten en expedir las Leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estado, declarados en esta Constitución y en especial para lo siguiente:

1. Dictar su Ley Orgánica.
2. Expedir, modificar, reformar o derogar los Códigos Nacionales.
3. Conceder al Órgano Ejecutivo, cuando éste lo solicite, facultades legislativas precisas, que podrán ser ejercidas, hasta por seis meses, mediante decretos-leyes.

La Ley que confiera dichas facultades expresará específicamente la materia y los fines de los respectivos decretos-leyes y no podrá comprender las materias previstas en los numerales 7, 10, 16 y 17 de este artículo, ni la tipificación de delitos y de penas. Los decretos-leyes sólo podrán establecer normas de carácter general y de sustancia legislativa.

Todo decreto-ley que el Ejecutivo emita será sometido por éste a la Asamblea Nacional al iniciar su próxima legislatura, para que la Asamblea, si lo estima conveniente, legisle sobre la respectiva materia en dicha legislatura o en cualquier otra.

4. Determinar, a propuesta del Órgano Ejecutivo, la estructura de la administración nacional mediante la creación de Ministerios, Entidades Autónomas, Semiautónomas, Empresas Estatales y demás establecimientos públicos, y distribuir entre ellos las funciones y negocios de la Administración, con el fin de asegurar la eficacia de las funciones administrativas.

5. Organizar los servicios públicos establecidos en esta Constitución, expedir o autorizar la expedición del pacto social y los estatutos de las sociedades de economía mixta y las Leyes orgánicas de las empresas industriales o comerciales del Estado, así como dictar las normas correspondientes a las carreras públicas.

6. Fijar anualmente el número de miembros que componen cada uno de los servicios de policía.

7. Intervenir en la aprobación del Presupuesto General del Estado, según se establece en el Título IX de esta Constitución.

8. Expedir la Ley General de Sueldos, propuesta por el Órgano Ejecutivo.

9. Regular el Sistema Monetario.

10. Establecer impuestos, tasas y contribuciones nacionales, rentas y monopolios oficiales para atender los servicios públicos.

11. Disponer sobre la aplicación de los bienes nacionales a usos públicos.

12. Dictar las normas generales a las cuales debe sujetarse el Órgano Ejecutivo para los siguientes efectos: negociar y contratar empréstitos; organizar el crédito público; reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio; fijar y modificar los aranceles, tasas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas.

Iguals normas dictará la Asamblea para regular la negociación y contratación de empréstitos por parte de las entidades autónomas y semiautónomas, de las empresas estatales y de las mixtas, cuando el Estado tenga el control administrativo, financiero o accionario de éstas.

13. Decretar las normas relativas a la celebración de contratos, en los cuales sea parte o tenga interés el Estado o algunas de sus entidades o empresas estatales o mixtas, cuando el Estado tenga el control administrativo, financiero o accionario de éstas.

14. Aprobar los contratos en los cuales sea parte o tenga interés el Estado o alguna de sus entidades o empresas, si su celebración no estuviere regulada previamente conforme al numeral.

13 de este artículo o si algunas estipulaciones contractuales no estuvieren ajustadas a la respectiva Ley de autorizaciones.

15. Establecer o reformar la división administrativa del territorio nacional, propuesta por el Órgano Ejecutivo.

16. Decretar amnistía por delitos políticos.

17. Aprobar o desaprobar, antes de su ratificación, los tratados y los convenios internacionales que celebre el Órgano Ejecutivo.

18. Declarar la guerra y facultar al Órgano Ejecutivo para asegurar la defensa nacional y concertar la paz.

Artículo 163.- [Funciones administrativas] Son funciones administrativas de la Asamblea Nacional:

1. Examinar las credenciales de sus miembros y decidir si han sido expedidas en la forma que prescribe la Ley.

2. Nombrar las Comisiones Permanentes, Especiales y Ocasionales de la Asamblea Nacional, así como las de Investigación sobre cualquier asunto de interés público.

3. Admitir la renuncia del Presidente y de los Vicepresidentes de la República.

4. Conceder licencia al Presidente de la República, cuando se la solicite y autorizarlo para ausentarse del territorio nacional.

5. Nombrar al Contralor y Subcontralor Generales de la República, así como a uno de los Magistrados del Tribunal Electoral y a sus suplentes.

6. Aprobar los nombramientos de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Procurador General de la Nación, del Procurador de la Administración y los demás que haga el Ejecutivo y que, por disposición constitucional, requieran la ratificación de la Asamblea Nacional.

7. Dar votos de censura contra los Ministros de Estado y los Directores de Entidades Autónomas o Semiautónomas. Para ello se requiere que dichos funcionarios hayan cometido actos o incurrido en graves errores lesivos a los intereses públicos. La moción de censura deberá ser propuesta por escrito, con seis días de antelación a su debate, por no menos de la mitad de los diputados y aprobada con el voto de las dos terceras partes de la Asamblea.

El funcionario que haya sido censurado deberá renunciar al cargo, dentro de un término no menor de treinta días.

8. Solicitar al Órgano Ejecutivo, cuando sea imprescindible, comunicación o informes sobre instrucciones impartidas a agentes diplomáticos o negociaciones reservadas. Tales comunicaciones e informes serán confidenciales y suministrados en sesión privada.

9. Examinar, aprobar o deslindar, con el concurso del Contralor General de la República, responsabilidades sobre la Cuenta General del Tesoro presentada por el Ejecutivo.

10. Citar a los Ministros de Estado y a los funcionarios que ella nombre o ratifique para que rindan informes verbales o escritos, sobre materias de su competencia.

La Ley Orgánica de la Asamblea establecerá el procedimiento para asegurar la oportuna comparecencia del funcionario, así como la corrección, propiedad y pertinencia del cuestionario y del informe.

11. Restablecer los derechos inherentes a la ciudadanía.

Artículo 164.- [Funciones judiciales] Son funciones judiciales de la Asamblea Nacional:

1. Conocer de las acusaciones que se presenten contra el Presidente de la República o quien lo sustituya en sus funciones, en los casos previstos en el artículo 191 de esta Constitución, así como de las presentadas contra los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, el Procurador General de la Nación y el Procurador de la Administración; y juzgarlos, si a ello hubiere lugar, por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones en perjuicio del libre funcionamiento del poder público o violatorios de la Constitución o las Leyes.

La Asamblea, por decisión de las dos terceras partes de sus miembros, sólo podrá imponer a dichos funcionarios las penas de destitución y de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el término que establezca la Ley, sin perjuicio de que sean juzgados y sancionados por la Corte Suprema de Justicia, si se les imputare la comisión de delitos que merezcan otra pena.

Artículo 165.- [Representación proporcional en las comisiones] La representación proporcional de las minorías será garantizada en la conformación de las Comisiones de la Asamblea Nacional.

Artículo 166.- [Prohibiciones a la Asamblea Nacional] Es prohibido a la Asamblea:

1. Delegar cualquiera de las funciones que le correspondan, salvo lo previsto en el numeral 3 del artículo 162.
2. Inmiscuirse en asuntos que son de competencia privativa de los otros Órganos del Estado.
3. Ordenar o autorizar partidas y programas no previstos en el Presupuesto General del Estado, salvo en casos de emergencia, así declarados expresamente por el Órgano Ejecutivo.
4. Aprobar partidas para pagar becas, pensiones, jubilaciones, gratificaciones o erogaciones que no hayan sido destinadas a tales fines, conforme a las leyes generales preexistentes.
5. Reconocer, a cargo del Tesoro Público, indemnizaciones que no hayan sido previamente declaradas por las autoridades competentes.
6. Inducir o compeler a los funcionarios para que adopten determinadas medidas.
7. Dar votos de aplauso o de censura respecto de actos del Presidente de la República.

Capítulo 3o.

La Formación de las Leyes

Artículo 167.- [Iniciativa legislativa] Las Leyes que la Asamblea Nacional expida en desarrollo de cualquiera de los numerales del artículo 162 de esta Constitución, así como las Leyes Orgánicas a que se refiere el artículo 168, requieren para su aprobación el voto favorable, en segundo y tercer debates, de la mayoría absoluta de sus miembros y deberán ser propuestas por:

1. Las Comisiones Permanentes de la Asamblea Nacional.
2. Los Ministros de Estado, con autorización del Consejo de Gabinete.
3. La Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Procurador General de la Nación y el Procurador de la Administración, si se trata de la expedición o de la reforma de los

Códigos Nacionales o de Leyes relacionadas con ellos.

4. El Tribunal Electoral, si se trata de la expedición o reforma del Código Electoral y demás asuntos de su competencia.

Las demás leyes que dicte la Asamblea Nacional sólo requerirán la aprobación de la mayoría de los Diputados asistentes a las respectivas sesiones y podrán ser propuestas por cualquier Ministro con autorización del Consejo de Gabinete o por uno o más Diputados.

Todos los funcionarios con iniciativa legislativa, mencionados en este artículo, tendrán derecho a voz en las sesiones de la Asamblea Nacional.

Artículo 168.- [Leyes orgánicas] Son Leyes Orgánicas las que regulan integralmente los Órganos Superiores del Estado y sus instituciones o dependencias directas; las que organizan los entes autónomos y semiautónomos nacionales, regionales o municipales, así como los servicios públicos; y las que codifican o sistematizan las diferentes ramas del Derecho.

Artículo 169.- [Debates de los proyectos de Leyes] Ningún proyecto será Ley de la República si no ha sido aprobado por la Asamblea Nacional en tres debates, en días distintos y sancionado por el Ejecutivo, en la forma que dispone esta Constitución.

Es primer debate de todo Proyecto de Ley el que se le da en la respectiva Comisión Permanente. Si el proyecto fuere recomendado por la Comisión, pasará a segundo debate.

También puede un Proyecto de Ley pasar a segundo debate cuando la mayoría de la Asamblea Nacional, a solicitud de uno de sus miembros, revocase el dictamen de la respectiva Comisión Permanente y diere su aprobación al proyecto.

Artículo 170.- [Remisión de proyectos de Leyes a comisiones] Todo Proyecto de Ley que no haya sido presentado por una de las Comisiones Permanentes, será remitido por el Presidente de la Asamblea Nacional a la Comisión que corresponda, para que lo estudie y discuta, dentro de un término prudencial.

Artículo 171.- [Sanción, promulgación y objeciones de proyectos de Leyes] Aprobado un proyecto de Ley pasará al Ejecutivo, y si éste lo sancionare, lo mandará promulgar como Ley. En caso contrario, lo devolverá con objeciones a la Asamblea.

El Ejecutivo dispondrá de un término máximo de treinta días hábiles para devolver con objeciones cualquier proyecto de Ley.

Si el Ejecutivo, una vez transcurrido el indicado término, no hubiese devuelto con objeciones un proyecto de Ley, no podrá dejar de sancionarlo y hacerlo promulgar.

Artículo 172.- [Aprobación por insistencia] El proyecto de Ley objetado en su conjunto por el Ejecutivo, volverá a la Asamblea Nacional a tercer debate. Si lo fuere sólo en parte, volverá a segundo debate para considerar únicamente las objeciones formuladas.

Si consideradas las objeciones por la Asamblea Nacional, el proyecto fuere aprobado por los dos tercios de los Diputados que componen la Asamblea, el Ejecutivo lo sancionará y lo hará promulgar. Si no obtuviere la aprobación de este número de Diputados, el proyecto de Ley quedará rechazado.

Artículo 173.- [Objeción de inexecutable] Cuando el Presidente de la República objetare un proyecto de Ley por considerarlo constitucionalmente inexecutable y la Asamblea Nacional, por los dos tercios de sus miembros, insistiese en la adopción del mismo, aquél presentará, ante la Corte Constitucional, objeción de inexecutable del proyecto. Si la Corte coincide con la objeción presidencial, el proyecto quedará definitivamente rechazado; si decidiere que es executable, el Presidente lo sancionará y lo hará promulgar como Ley de la República.

Artículo 174.- [Sanción y promulgación por el Presidente de la Asamblea Nacional] Si el Ejecutivo no cumpliera con el deber de sancionar y hacer promulgar una Ley, en los términos y según las condiciones que este Título establece, la sancionará y la hará promulgar

el Presidente de la Asamblea Nacional.

Artículo 175.- [Promulgación de Leyes] Toda Ley será promulgada dentro de los seis días hábiles siguientes al de su sanción y comenzará a regir desde su promulgación, salvo que ella misma establezca que rige a partir de una fecha posterior. La promulgación extemporánea de una Ley no implica su inconstitucionalidad.

Artículo 176.- [Motivación de Leyes] Las Leyes podrán ser motivadas y al texto de ellas precederá la siguiente fórmula:

LA ASAMBLEA NACIONAL

DICTA:

Artículo 177.- [Proyectos de Leyes pendientes] Los proyectos de Leyes que queden pendientes en primer debate en una legislatura, sólo podrán ser considerados como proyectos nuevos.

TITULO V

EL ORGANO EJECUTIVO

Capítulo 1o.

Disposiciones generales

Artículo 178.- [Conformación del órgano ejecutivo] El Órgano Ejecutivo está constituido por el Presidente de la República y los Ministros de Estado.

Artículo 179.- [Formas de ejercer las funciones del ejecutivo] El Órgano Ejecutivo puede ejercer sus funciones por medio del Presidente solo, por éste y un Ministro, mediante el Consejo de Gabinete o en cualquier otra forma que esta Constitución determine.

Capítulo 2o.

El Presidente y los Vicepresidentes de la República

Artículo 180.- [Elección y período presidencial] El Presidente de la República será elegido, mediante postulación partidista, votación popular directa y mayoría de votos, para un período de cuatro años. Con el Presidente de la República serán elegidos, de la misma manera y por igual período, un Primer y un Segundo Vicepresidentes, quienes reemplazarán al Presidente en sus ausencias conforme a las disposiciones prescritas en esta Constitución.

Artículo 181.- [Requisitos para ser Presidente] Para ser Presidente o Vicepresidente de la República se requiere:

1. Ser panameño por nacimiento.
2. Haber cumplido cuarenta años de edad.
3. No haber sido condenado por delito contra la administración pública o contra la

libertad o pureza del sufragio.

Artículo 182.- [Prohibición de postulación] No podrán ser postulados candidatos a la Presidencia o a las Vicepresidencias de la República los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de quienes hayan ejercido dichos cargos en el período inmediatamente anterior.

Artículo 183.- [Prohibición de reelección] El Presidente y los Vicepresidentes de la República, y quienes los hayan sustituido, no podrán ser reelegidos para el mismo cargo en el período presidencial siguiente.

Artículo 184.- [Toma de posesión del Presidente] El Presidente y los Vicepresidentes de la República tomarán posesión de sus respectivos cargos ante la Asamblea Nacional el día primero de septiembre siguiente al de su elección.

Si por cualquier motivo el Presidente o los Vicepresidentes de la República no pudieren tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo harán ante la Corte Suprema de

Justicia; si no fuere posible, ante un Notario Público y, en defecto de éste, ante dos testigos hábiles.

Artículo 185.- [Juramento Presidencial] El presidente y los Vicepresidentes al tomar posesión prestarán juramento en estos términos: “Juro a Dios y a la Patria cumplir fielmente la Constitución y las Leyes de la República”.

El ciudadano que no profese creencia religiosa podrá prescindir de la invocación a Dios en su juramento.

Artículo 186.- [Atribuciones del Presidente por sí solo] Son atribuciones que ejerce por sí solo el Presidente de la República:

1. Coordinar la labor de Administración y los establecimientos públicos.

2. Nombrar y separar libremente a los Ministros de Estado.
3. Invalidar los resueltos ministeriales.
4. Convocar a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias.
5. Presentar el primer día de cada legislatura ordinaria un mensaje sobre los asuntos de la Administración.
6. Objetar los proyectos de Leyes por considerarlos inconvenientes o inexecutable.
7. Velar por la conservación del orden público.
8. Las demás que le correspondan de conformidad con la Constitución o la Ley.

Artículo 187.- [Vicepresidentes] Los Vicepresidentes podrán asistir, con derecho a voz, a las sesiones del Consejo de Gabinete. Podrán, asimismo, asesorar al Presidente de la República en las materias que éste determine, y representarlo en actos públicos, en congresos nacionales o internacionales o en misiones especiales que el Presidente les encomiende.

Artículo 188.- [Ausencia del territorio nacional] El Presidente de la República podrá ausentarse del territorio nacional hasta por diez días, en cada ocasión, sin pedir licencia del cargo.

Artículo 189.- [Vacante temporal del cargo de Presidente] El Presidente de la República podrá separarse de su cargo mediante licencia que, cuando no exceda de treinta días, le será concedida por el Consejo de Gabinete. Para la separación por más de treinta días, se requerirá licencia previa de la Asamblea Nacional.

Durante el ejercicio de la licencia que se conceda al Presidente de la República para separarse de su cargo, éste será reemplazado por el Primer Vicepresidente y, en defecto de éste, por el Segundo Vicepresidente. El Vicepresidente que reemplace temporalmente al Presidente tendrá el título de Encargado de la Presidencia de la República.

Cuando por cualquier motivo las ausencias del Presidente no pudieren ser llenadas por los Vicepresidentes, ejercerá la Presidencia uno de los Ministros de Estado, que éstos elegirán por mayoría de votos, quien debe cumplir con los requisitos necesarios para ser Presidente de

la República, y tendrá el título de Ministro Encargado de la Presidencia de la República.

Artículo 190.- [Vacante absoluta del cargo de Presidente] Por falta absoluta del Presidente de la República, asumirá el cargo el Primer Vicepresidente por el resto del período, y en defecto de éste, el Segundo Vicepresidente.

Cuando el Primer Vicepresidente asuma el cargo de Presidente, el Segundo Vicepresidente pasará a ser Primer Vicepresidente.

Cuando por cualquier motivo la falta absoluta del Presidente no pudiere ser llenada por los Vicepresidentes, ejercerá la Presidencia uno de los Ministros de Estado, que éstos elegirán por mayoría de votos, quien debe cumplir con los requisitos necesarios para ser Presidente de la República, y tendrá este título.

Cuando la falta absoluta del Presidente y de los Vicepresidentes se produzca por lo menos dos años antes de la expiración del período presidencial, el Ministro de Estado elegido por sus colegas sólo actuará, con el título de Ministro Encargado de la Presidencia de la República, mientras la Asamblea Legislativa, por mayoría absoluta, elija Presidente de la República por el resto del período presidencial, a un ciudadano que llene los requisitos para ejercer el referido cargo.

Artículo 191.- [Responsabilidad del Presidente] El Presidente de la República, o quien lo sustituya, es responsable por:

1. Extralimitación de sus funciones constitucionales.
2. Actos de violencia o de coacción en el curso del proceso electoral.
3. Obstrucción de las funciones de la Asamblea Nacional o de las demás autoridades o entidades públicas que establece la Constitución.

En estos casos será juzgado por la Asamblea Nacional, la cual, por mayoría de dos tercios de sus miembros, sólo podrá imponerle las penas de destitución y de inhabilitación para ejercer cargos públicos, por el término que fije la Ley.

Durante el período para el cual haya sido elegido el Presidente de la República, o quien haga sus veces, no podrá ser perseguido, detenido ni juzgado por otros delitos, sino en virtud

de acusación formal admitida y acogida por no menos de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional. Si ésta, por igual mayoría, determina que hay lugar a formación de causa, lo suspenderá del cargo y dará traslado a la Corte Suprema de Justicia, la cual lo juzgará en la forma y condiciones que determine la Ley.

Artículo 192.- [Emolumentos del Presidente] Las modificaciones a los emolumentos asignados por la Ley al Presidente de la República entrarán a regir en el período presidencial siguiente.

Capítulo 3o.

Los Ministros de Estado

Artículo 193.- [Jefes del ramo] Los Ministros de Estado son los Jefes de sus ramos y participan con el Presidente de la República en el ejercicio de sus funciones. Serán auxiliados por los Viceministros respectivos.

Artículo 194.- [Distribución de los negocios] La distribución de los negocios entre los Ministros de Estado se efectuará de conformidad con la Ley.

Artículo 195.- [Requisitos para ser ministro] Los Ministros de Estado deben ser panameños por nacimiento, haber cumplido treinta años de edad y no haber sido condenados, con pena privativa de la libertad, por delito contra la administración pública.

Los Viceministros serán nombrados mediante decreto a propuesta de los Ministros respectivos y deberán cumplir los mismos requisitos que éstos.

Artículo 196.- [Impedimentos para ser ministro] No podrán ser nombrados Ministros de Estado los parientes del Presidente de la República dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni ser miembros de un mismo Gabinete personas unidas entre sí por los expresados grados de parentesco.

Artículo 197.- [Atribuciones del Presidente con el Ministro respectivo] Son atribuciones que ejerce el Presidente de la República con la participación del ministro respectivo:

1. Sancionar y promulgar las Leyes, obedecerlas y velar por su exacto cumplimiento.
2. Enviar al Organo Legislativo, dentro del término establecido en el artículo 306, el proyecto de Presupuesto General del Estado para el año fiscal siguiente.
3. Dirigir las relaciones exteriores; celebrar tratados y convenios internacionales, los cuales serán sometidos a la consideración del Organo Legislativo; y acreditar y recibir agentes diplomáticos y consulares.
4. Reglamentar las Leyes que lo requieren para su mejor cumplimiento, sin apartarse en ningún caso de su texto ni de su espíritu.
5. Dirigir, reglamentar e inspeccionar los servicios establecidos en esta Constitución.
6. Informar al Organo Legislativo de las vacantes producidas en los cargos que éste debe proveer.
7. Celebrar contratos administrativos para la prestación de servicios y ejecución de obras públicas.
8. Nombrar a los Jefes, Gerentes y Directores de las entidades públicas autónomas, semiautónomas y de las empresas estatales, según lo dispongan las Leyes respectivas.
9. Nombrar y separar a los Directores y demás miembros de los servicios de policía y disponer el uso de éstos.
10. Conferir ascensos a los miembros de los servicios de policía, con arreglo al escalafón y a las disposiciones legales correspondientes.
11. Nombrar y separar libremente a los Gobernadores de las Provincias.
12. Nombrar a los Viceministros.
13. Nombrar a las personas que deban desempeñar cualesquier cargos o empleos nacionales, cuya provisión no corresponda a otro funcionario o corporación.
14. Vigilar la recaudación y administración de las rentas nacionales.
15. Conceder a los nacionales que lo soliciten permiso para aceptar cargos de gobiernos extranjeros, en los casos establecidos por la Ley.

16. Decretar indultos por delitos políticos; conceder libertad condicional y rebajar penas a los reos de delitos comunes.

17. Ejercer las demás atribuciones que le correspondan de acuerdo con esta Constitución y la Ley.

Artículo 198.- [Refrendo] Los decretos y demás actos normativos, dispositivos o resolutivos que emita el Presidente de la República, salvo los casos previstos en esta Constitución, no tendrán valor si no son refrendados por el respectivo Ministro de Estado, quien se hace responsable de ellos.

Artículo 199.- [Resueltos ministeriales] Las órdenes y disposiciones que emita un Ministro de Estado por instrucciones del Presidente de la República se denominarán Resueltos Ministeriales. Estos podrán ser invalidados por el propio Presidente, si los estima irregulares o inconvenientes.

Artículo 200.- [Informe anual de los Ministros de Estado] Los Ministros de Estado entregarán personalmente a la Asamblea Legislativa un informe o memoria anual sobre el estado de los negocios de su Ministerio y sobre las reformas que recomienden.

Capítulo 4o.

El Consejo de Gabinete

Artículo 201.- [Constitución del Consejo] El Consejo de Gabinete es la reunión formal del Presidente de la República, quien lo preside, con los Ministros de Estado.

Artículo 202.- [Funciones del Consejo de Gabinete] Son funciones del Consejo de Gabinete:

1. Actuar como cuerpo consultivo en los asuntos que someta a su consideración el Presidente de la República y en los que deba ser oído por mandato de la Constitución o de la Ley.
2. Acordar con el Presidente de la República los nombramientos de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Procurador General de la Nación, del Procurador de la Administración, y de sus respectivos suplentes, con sujeción a la aprobación de la Asamblea Nacional.
3. Autorizar la celebración de contratos y la enajenación de bienes nacionales, según lo determine la Ley.
4. Autorizar al Presidente de la República para que transija o someta a arbitraje los asuntos litigiosos en que el Estado sea parte, previo concepto favorable del Procurador General de la Nación.
5. Decretar, bajo la responsabilidad colectiva de todos sus miembros, el estado de urgencia y la suspensión de las normas constitucionales pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de esta Constitución.
6. Requerir de los funcionarios públicos, entidades estatales y empresas mixtas los informes que estime necesarios o convenientes para el despacho de los asuntos que deba considerar y citar a los primeros y a los representantes de las segundas para que rindan informes verbales.
7. Autorizar la negociación y contratación de empréstitos; la organización del crédito público; el reconocimiento de la deuda nacional y el arreglo de su servicio; el establecimiento y modificación de los aranceles, de las tasas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas, con sujeción a las normas previstas en las Leyes a que se refiere el numeral 12 del artículo 162. Mientras el Órgano Legislativo no haya dictado Ley o Leyes que contengan las normas generales correspondientes, el Órgano Ejecutivo podrá dictar éstas y enviará al Órgano Legislativo copia de todos los Acuerdos de Gabinete que emita en ejercicio de esta facultad.
8. Dictar el reglamento de su régimen interno y ejercer las demás funciones que le señalen la Constitución o la Ley.

Capítulo 5o.

El Consejo de Estado

Artículo 203.- **[Miembros del consejo de Estado]** El Consejo de Estado es la reunión formal del Presidente de la República, quien lo preside, con los Ministros de Estado, los Vicepresidentes de la República, el Contralor General de la República, el Presidente de la Asamblea Nacional, y los Directores Generales de Entidades Autónomas y Semiautónomas.

Artículo 204.- **[Función del consejo de Estado]** El Consejo de Estado tiene la función de actuar como cuerpo consultivo en los asuntos que le presente el Presidente de la República.

TITULO VI

LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Capítulo 1o.

El Órgano Judicial

Artículo 205.- [Principios de la administración de justicia] La administración de justicia es gratuita, expedita e ininterrumpida.

La gestión y la actuación de todo proceso se surtirán en papel simple y no estarán sujetas a impuesto alguno.

Artículo 206.- [Constitución del Órgano Judicial] El Órgano Judicial está constituido por la Corte Suprema de Justicia y por los tribunales y los juzgados que la Ley establezca.

Artículo 207.- [Composición de la Corte Suprema de Justicia] La Corte Suprema de Justicia estará compuesta del número de Magistrados que determine la Ley; serán nombrados, para un período de diez años, por el Consejo de Gabinete, con la aprobación del Órgano Legislativo.

Cada dos años se designarán dos Magistrados, versados en las correspondientes disciplinas jurídicas, salvo en los casos en que, por razón del número de miembros de la Corte, se nombren más o menos de dos Magistrados. La Ley que aumente el número de Magistrados de la Corte, mantendrá el principio de nombramientos escalonados.

Cada Magistrado tendrá un suplente, nombrado en igual forma que el principal y por el mismo período, quien lo reemplazará en sus ausencias.

La falta absoluta de un Magistrado será cubierta con un nuevo nombramiento por el resto del período respectivo.

La Ley dividirá la Corte en Salas, cada una formada por tres o más Magistrados.

Artículo 208.- [Requisitos para ser Magistrado] Para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia se requiere:

1. Ser panameño por nacimiento.
2. Haber cumplido cuarenta años de edad.
3. Hallarse en pleno goce de los derechos civiles y políticos.
4. Ser graduado en Derecho y haber inscrito el diploma universitario en la oficina que la Ley señale.
5. Haber completado un período de diez años durante el cual haya ejercido indistintamente la profesión de abogado, la cátedra en Derecho, o cualquier cargo o actividad que requieran el título universitario en Derecho.

Artículo 209. - [**Sueldos de los magistrados de la Corte**] Los sueldos y asignaciones de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia no serán inferiores a los de los Ministros de Estado.

Artículo 210. - [**Potestad nominadora**] Los Magistrados y los Jueces serán nombrados por su superior jerárquico, en la forma que determine la Ley. El personal subalterno será nombrado por el Tribunal o Juez respectivo. Todos estos nombramientos serán hechos con arreglo a la Carrera Judicial.

Artículo 211. - [**Independencia judicial**] Los Magistrados y Jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y no están sometidos más que a la Constitución y a la Ley.

Artículo 212. - [**Impedimento para ser miembro del Órgano Judicial**] La persona que haya sido condenada por delito doloso, mediante sentencia ejecutoriada, proferida por un Tribunal de Justicia, no podrá desempeñar cargo alguno en el Órgano Judicial.

Artículo 213. - [**Incompatibilidades de magistrados y jueces**] Los Magistrados y Jueces principales no podrán desempeñar ningún otro cargo público, excepto el de profesor para la enseñanza del Derecho en establecimientos de educación superior.

Artículo 214.- [Incompatibilidades de los funcionarios judiciales] Los cargos del Órgano Judicial son incompatibles con toda participación en la política partidista, con el ejercicio de la abogacía, del comercio y de cualquier otro cargo retribuido. Se exceptúan el ejercicio del sufragio y lo previsto en el artículo precedente.

Artículo 215.- [Estabilidad de los magistrados y jueces] Los Magistrados y los Jueces no serán depuestos ni suspendidos o trasladados en el ejercicio de sus cargos, sino en los casos y con las formalidades que disponga la Ley.

Toda supresión de empleos en el ramo judicial se hará efectiva al finalizar el período correspondiente.

Artículo 216.- [Detención y arresto de magistrados y jueces] Los Magistrados y Jueces no podrán ser detenidos ni arrestados, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad judicial competente para juzgarlos.

Artículo 217.- [Asesoría y defensa jurídica] La Ley arbitrará los medios para prestar asesoramiento y defensa jurídica a quienes, por su situación económica, no puedan procurárselos por sí mismos.

Artículo 218.- [Juicio por jurados] Se instituye el juicio por jurados. La Ley determinará las causas que deban decidirse por éste.

Capítulo 2o.

La Corte Constitucional

Artículo 219.- [Carácter de la Corte Constitucional] La Corte Constitucional es un tribunal especial permanente e independiente, cuya función básica es la defensa del orden constitucional.

Artículo 220.- [**Composición de la Corte Constitucional**] La Corte Constitucional estará compuesta por cinco magistrados titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente.

Artículo 221.- [**Designación, período y requisitos de los magistrados**] Los Magistrados de la Corte Constitucional y sus suplentes serán designados para un período de diez años, por las mismas autoridades y en la misma forma en que lo son los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y deberán llenar los mismos requisitos exigidos para la designación de éstos.

Los suplentes reemplazarán a los magistrados titulares en sus ausencias ocasionales y temporales, así como en las absolutas mientras se nombra un titular para el resto del respectivo período.

Artículo 222.- [**Presidencia de la Corte Constitucional**] La Presidencia de la Corte Constitucional será ejercida durante dos años por el Magistrado titular que elijan sus colegas y no podrá ser reelegido para el período siguiente.

Artículo 223.- [**Disposiciones aplicables a los magistrados**] A los Magistrados titulares de la Corte Constitucional les son aplicables las disposiciones establecidas en los artículos 211, 212, 213, 214, 215 y 216 de esta Constitución.

Artículo 224.- [**Funciones de la Corte Constitucional**] La Corte Constitucional, además de las que le señalen la Constitución y la Ley, tendrá las siguientes funciones:

1. Ejercer privativamente la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución Nacional. En consecuencia le compete decidir, en la forma prevista por el Título VII de esta Constitución, todas las acciones y consultas de inconstitucionalidad, así como las objeciones de inexecutable constitucional.

2. Conocer de las demandas de habeas corpus y de amparo de derechos constitucionales por actos que dimanen de corporaciones o funcionarios con mando y jurisdicción en toda la República, o en dos o más Provincias.

3. Conocer, en efecto suspensivo, de los recursos de apelación en los casos de habeas corpus en que Tribunales Superiores de Justicia declaren procedente la detención o amenaza de detención de una persona, o nieguen una acción de amparo.

Capítulo 3o.

El Ministerio Público

Artículo 225.- [Composición del ministerio público] El Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por los Fiscales y Personeros y por los demás funcionarios que establezca la Ley.

Determinados agentes del Ministerio Público podrán ejercer, por delegación, según lo disponga la Ley, las funciones del Procurador General de la Nación.

Cada agente del Ministerio Público tendrá dos suplentes, quienes lo reemplazarán en su orden, en las ausencias temporales y en las absolutas mientras se llene la vacante.

Artículo 226.- [Atribuciones del ministerio público] Son atribuciones del Ministerio Público:

1. Defender los intereses del Estado o del Municipio.
2. Promover el cumplimiento o ejecución de las Leyes, sentencias judiciales y disposiciones administrativas.
3. Vigilar la conducta oficial de los funcionarios públicos y cuidar que todos desempeñen cumplidamente sus deberes.
4. Perseguir los delitos y contravenciones de disposiciones constitucionales o legales.
5. Ejercer las demás funciones que determine la Ley.

Artículo 227.- [Nombramiento del Procurador General de la Nación y otros agentes] El Procurador General de la Nación y sus Suplentes serán nombrados del mismo modo que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Los Fiscales y Personeros serán nombrados por sus superiores jerárquicos. El personal subalterno será nombrado por el Fiscal o Personero respectivo. Todos estos nombramientos serán hechos con arreglo a la Carrera Judicial.

Artículo 228.- [Período y requisitos del Procurador General] El Procurador General de la Nación será nombrado por diez años y debe llenar los mismos requisitos exigidos a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Artículo 229.- [Funciones del Procurador General] Son funciones especiales del Procurador General de la Nación:

1. Acusar ante la Corte Suprema de Justicia a los funcionarios, cuyo juzgamiento corresponda a esta Corporación.
2. Velar por que los demás Agentes del Ministerio Público desempeñen fielmente su cargo, y que se les exija responsabilidad por las faltas o delitos que cometan.

Artículo 230.- [Disposición aplicables a los agentes del ministerio público] A los agentes del Ministerio Público les son aplicables las disposiciones de los artículos 212, 213, 214, 215 y 216 de esta Constitución; y, al Procurador General, además de éstas, la contenida en el artículo 211.

Capítulo 4o.

El Procurador de la Administración

Artículo 231.- [Nombramiento y requisitos del Procurador] El Procurador de la Administración será nombrado por diez años en la misma forma que el Procurador General de la Nación y debe llenar los mismos requisitos que éste.

Artículo 232.- [Suplentes del Procurador] El Procurador de la Administración tendrá dos suplentes que lo reemplazarán, en su orden, en las ausencias temporales y en las absolutas mientras se llena la vacante.

Los suplentes del Procurador de la Administración deberán llenar los mismos requisitos que éste y serán nombrados, conjuntamente con él, en la misma forma y por el mismo período.

Artículo 233.- [Status y funciones del Procurador] El Procurador de la Administración no forma parte del Ministerio Público, ni ejerce las funciones fiscalizadoras, instructoras y acusatorias, atribuidas a los agentes de dicho Ministerio. La misión esencial del Procurador de la Administración es la de defender la integridad de la Ley y las actuaciones lícitas de la Administración Pública. Por tanto, entre otras funciones específicas, tiene las siguientes:

1. Intervenir, en interés de la Ley, en todos los procesos contencioso-administrativos, así como en las consultas de interpretación y de apreciación de validez de actos administrativos, que se surtan ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
2. Servir de consejero jurídico a los funcionarios administrativos que consulten su parecer respecto a determinada interpretación de la Ley o sobre el procedimiento que se ha de seguir.
3. Coordinar la labor de asesoramiento jurídico a la Administración Pública y dirimir las diferencias o conflictos de interpretación legal que se produzcan entre dos o más entidades administrativas.
4. Velar por los derechos fundamentales de las personas.
5. Canalizar, tramitar e investigar las quejas sobre infracciones de derechos fundamentales que le presente cualquiera persona afectada.
6. Orientar e instruir a los habitantes en el territorio nacional y a los nacionales que se hallen en el exterior, en cuanto al ejercicio y defensa de sus derechos ante las autoridades públicas y ante las personas o entidades particulares.
7. Rendir informes a la Asamblea Nacional sobre el cumplimiento de sus funciones.
8. Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de su dependencia, de acuerdo con la Ley de la Carrera Judicial.

9. Cualesquiera otras que le señale la Ley, en armonía con el contenido del presente artículo.

Artículo 234.- [Disposiciones aplicables al Procurador] Al Procurador de la Administración le son aplicables las disposiciones establecidas en los artículos 211, 212, 213, 214, 215 y 216 de esta Constitución.

TITULO VII

GARANTIAS JURISDICCIONALES FUNDAMENTALES

Capítulo 1o.

La Jurisdicción Constitucional

Artículo 235.- [Habeas Corpus] Todo individuo que haya sido amenazado con la pérdida de su libertad corporal o que se encuentre detenido, fuera de los casos o sin las formalidades prescritas por la Constitución o la Ley, tendrá derecho a presentar acción de habeas corpus, la cual podrá ser interpuesta a petición propia o de otra persona, sin tomar en cuenta la pena aplicable.

El proceso de habeas corpus será sumario y tendrá prelación ante cualesquiera otros, sin que pueda ser suspendido o dilatado por razón de horas o días inhábiles.

Artículo 236.- [Amparo] Toda persona contra la cual se expida o se ejecute, por cualquier autoridad pública, una orden de hacer o de no hacer que amenace o viole derechos constitucionales podrá, por medio de apoderado judicial, exigir la revocación de la referida orden.

Procederá, asimismo, el amparo contra omisiones de autoridad pública, cuando amenacen o lesionen derechos fundamentales.

Artículo 237.- [Procedimiento sumario] La acción de amparo de derechos fundamentales se tramitará mediante procedimiento sumario y será de competencia de los tribunales jurisdiccionales, en la forma que determine la Ley.

La acción de amparo contra órdenes de hacer o de no hacer prescribe cuatro meses después de emitida la orden.

Artículo 238.- [Guarda de la Constitución] La guarda de la integridad de la Constitución se confía a la Corte Constitucional. Por tanto, ésta decidirá sobre la

inconstitucionalidad de las Leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos que, por razones de fondo o de forma, demande ante ella cualquier persona.

Artículo 239.- [Consulta de Inconstitucionalidad] Si en un proceso el funcionario encargado de impartir justicia advirtiere, o se lo advirtiere alguna de las partes, que la disposición legal o reglamentaria aplicable al caso es inconstitucional, elevará una consulta a la Corte Constitucional, salvo que la disposición haya sido objeto de pronunciamiento por parte de ésta, y continuará el curso del proceso hasta colocarlo en estado de decidir. Las partes únicamente podrán hacer la aludida advertencia una vez por instancia.

Durante la investigación sumarial sólo los funcionarios de instrucción podrán efectuar la consulta de inconstitucionalidad.

Artículo 240.- [Objección de Inexequibilidad] La Corte Constitucional decidirá las objeciones de inexequibilidad constitucional que interponga el Ejecutivo. Dichas objeciones proceden contra proyectos de Leyes y de reformas a la Constitución.

Artículo 241.- [Criterio de interpretación integral] En las demandas de inconstitucionalidad y de amparo la Corte Constitucional podrá considerar todos los preceptos pertinentes del texto constitucional.

Artículo 242.- [Inconstitucionalidad de actos individualizados] Quien demande la inconstitucionalidad de actos individualizados deberá acreditar perjuicio o interés personales. Las sentencias sobre dichos actos podrán tener carácter retroactivo.

Artículo 243.- [Efectos de las sentencias de inconstitucionalidad] Las sentencias de la Corte Constitucional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional; y las dictadas sobre actos de carácter general deberán ser publicadas en la Gaceta Oficial.

Artículo 244.- [**Prohibición de reproducir actos jurídicos**] Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido de un acto jurídico declarado inconstitucional por razones de fondo, mientras subsistan en la Constitución las disposiciones que sirvieron para hacer la respectiva declaración de inconstitucionalidad.

Capítulo 2o.

La Jurisdicción Contencioso-Administrativa

Artículo 245.- [**Ámbito de lo contencioso-administrativo**] La jurisdicción contencioso-administrativa será ejercida por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Dicha Sala decidirá las demandas por prestación defectuosa o deficiente de servicios públicos, así como las referentes a omisiones, actos, resoluciones, órdenes o disposiciones que ejecuten, adopten, expidan o en que incurran, al ejercer sus funciones o con el pretexto de ejercerlas, los funcionarios o autoridades nacionales, provinciales, municipales o de entidades públicas autónomas o semiautónomas.

Artículo 246.- [**Competencia de la sala tercera**] La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema, previo concepto del Procurador de la Administración, podrá anular los actos acusados de ilegalidad, restablecer el derecho particular violado, estatuir nuevas disposiciones en remplazo de las demandadas y pronunciarse acerca del sentido y alcance de un acto administrativo o de su valor legal.

Artículo 247.- [**Contencioso subjetivo y objetivo**] Podrán acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa las personas afectadas por el acto, resolución, orden o disposición de que se trate y, en ejercicio de la acción pública, cualquier persona natural o jurídica.

Artículo 248.- [**Carácter de la intervención del Procurador**] La intervención del Procurador de la Administración en los procesos contencioso-administrativos deberá ser en defensa de la integridad de la Ley.

TITULO VIII

EL REGIMEN LOCAL

Capítulo 1o.

El Municipio

Artículo 249.- [Autonomía Municipal] El Municipio es la organización política autónoma de la comunidad establecida en el territorio denominado Distrito.

El régimen municipal será democrático y de carácter esencialmente administrativo.

Artículo 250.- [Principio de subsidiaridad] El Estado complementará la gestión municipal, cuando ésta sea insuficiente.

Artículo 251.- [Servidor público municipal] Ningún servidor público municipal podrá ser suspendido ni destituido por las autoridades administrativas nacionales.

Artículo 252.- [Postulación] Los funcionarios municipales de elección popular podrán ser postulados por partidos políticos o en forma independiente, de acuerdo con la Ley.

Artículo 253.- [Concejo] En cada Distrito habrá una corporación que se denominará Concejo Municipal o Concejo. Sus miembros se denominan Concejales y serán elegidos en votación popular directa por los residentes del respectivo Distrito para un período de dos años. Los Concejales podrán ser reelegidos por dos períodos consecutivos.

Los extranjeros mayores de edad con más de cuatro años de residencia en un Distrito, podrán votar en sus elecciones municipales.

Artículo 254.- [Número de concejales] La Ley determinará el número de Concejales que se elegirá en cada Distrito de acuerdo con su población y recursos, bajo el entendimiento de que ningún Concejo podrá tener menos de cinco miembros ni más de veintiuno.

Artículo 255.- [**Iniciativa y referendo municipales**] Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa y de referendo en los asuntos atribuidos a los Concejos.

Artículo 256.- [**Requisitos para ser concejal**] Para ser Concejal se requiere:

1. Ser ciudadano panameño mayor de veinticinco años.
2. Haber residido en el respectivo Distrito durante el año inmediatamente anterior al de su elección.
3. No haber sido condenado por delito contra la administración pública o contra la libertad o pureza del sufragio.

Artículo 257.- [**Pérdida del cargo de concejal**] El cargo de Concejal se pierde:

1. Por renuncia
2. Por cambio voluntario de residencia fuera del Distrito.
3. Por nombramiento para un cargo público remunerado, salvo en el ramo de educación.
4. Por destitución mediante resolución judicial.
5. Por revocatoria popular del mandato conforme lo regule la Ley.

Artículo 258.- [**Alcalde**] El Alcalde es el Jefe de la administración municipal. Tendrá dos suplentes. Será elegido por votación popular directa o nombrado por el Gobernador, según lo determine la Ley.

En caso de elección popular, el período del Alcalde será de dos años y podrá ser reelegido dos veces consecutivas.

Artículo 259.- [**Atribuciones de los Alcaldes**] Los Alcaldes tendrán, entre otras, las siguientes atribuciones:

1. Presentar proyectos de acuerdos, especialmente el del Presupuesto de Rentas y Gastos del Municipio.
2. Ordenar los gastos de la administración local, ajustándose al Presupuesto y a los métodos de contabilidad.

3. Nombrar y remover a los Corregidores y a los demás funcionarios municipales, cuya designación no corresponda a otra autoridad.

Artículo 260.- [Tesorero] El Tesonero es el jefe de la oficina de recaudación de las rentas municipales. Será elegido por el Concejo para un período determinado por la Ley.

Artículo 261.- [Auditoría municipal] La Ley determinará el sistema de auditoría de cada Municipio.

Artículo 262.- [Ingresos Municipales] Serán fuentes de ingreso municipal, además de las que señale la Ley conforme al artículo anterior, las siguientes:

1. El producto de sus áreas o ejidos lo mismo que de sus bienes propios.
2. Las tasas por el uso de sus bienes o servicios.
3. Los derechos sobre espectáculos públicos.
4. Los impuestos sobre expendio de bebidas alcohólicas.
5. Los derechos, determinados por la Ley, sobre extracción de arena, piedra de cantera, tosca, arcilla, coral, cascajo y piedra caliza.
6. Las multas que impongan las autoridades municipales.
7. Las subvenciones estatales y las donaciones.
8. Los derechos sobre explotación y tala de bosques.
9. El impuesto de degüello de ganado vacuno y porcino.

Artículo 263.- [Impuestos municipales] Son municipales los impuestos que no tengan incidencia fuera del Distrito, pero la Ley podrá establecer excepciones.

Artículo 264.- [Regulación de exenciones] El Estado no podrá conceder exenciones de derechos, tasas o impuestos municipales. Los Municipios sólo podrán hacerlo mediante acuerdo municipal.

Artículo 265.- [Empresas municipales y empréstitos] Los Municipios podrán crear empresas municipales o mixtas para la explotación de bienes o prestación de servicios. Podrán, asimismo, contratar empréstitos, previa autorización del Órgano Ejecutivo. La Ley determinará el procedimiento.

Artículo 266.- [Corregimientos] Los Corregimientos son divisiones administrativas de los Distritos.

Artículo 267.- [Elección de representante] Cada Corregimiento elegirá un Representante y su Suplente por votación popular directa para un período de dos años. Los Representantes de Corregimientos podrán ser reelegidos dos veces consecutivas.

Artículo 268.- [Atribuciones del representante] Los Representantes de Corregimientos tienen, entre otras, la atribución de fiscalizar las actuaciones de las autoridades del respectivo Corregimiento y la de defender los legítimos intereses de los moradores de éste.

Artículo 269.- [Corregidor] En cada Corregimiento habrá un Corregidor nombrado por el Alcalde del respectivo Municipio.

Artículo 270.- [Junta Comunal] En cada Corregimiento habrá una Junta Comunal que promoverá el desarrollo de la colectividad y velará por la solución de sus problemas.

Artículo 271.- [Composición de la Junta Comunal] La Junta Comunal estará compuesta por el Representante de Corregimiento, por el Corregidor de éste y por cinco ciudadanos residentes en el Corregimiento, escogidos en la forma que determine la Ley.

Artículo 272.- [Fusión de municipios y régimen de síndicos] La Ley regulará lo concerniente a la fusión de dos o más municipios y a la unificación intermunicipal, así como al régimen municipal de síndicos especializados.

Artículo 273.- [Emolumentos e incompatibilidades de los Concejales] La Ley determinará los emolumentos que han de percibir los concejales y sus incompatibilidades.

Artículo 274.- [Emolumentos de Alcaldes y Corregidores] Los Alcaldes y los Corregidores recibirán por sus servicios una remuneración. La Ley determinará en qué Municipios será pagada por éstos y en cuáles por el Tesoro Nacional.

Artículo 275.- [Regulación de ciertas autoridades] La Ley regulará todo lo concerniente al status, requisitos, funciones y demás particularidades relativas a los Representantes de Corregimiento, a los Corregidores y a las Juntas Comunales.

Capítulo 2o.

La Provincia

Artículo 276.- [Gobernador] En cada Provincia habrá un Gobernador de libre nombramiento y remoción del Órgano Ejecutivo, a quien representará.

La Ley determinará las funciones y deberes de los Gobernadores.

Artículo 277.- [Consejo Provincial] En cada Provincia funcionará un Consejo Provincial integrado por los Concejales de los Distritos que la componen y por otros miembros, con derecho a voz, que la Ley determine al regular la organización y funcionamiento de dicho Consejo. Entre estos últimos deberán estar el Gobernador de la Provincia y los Alcaldes de sus Distritos.

Artículo 278.- [Funciones del Consejo Provincial] Son funciones del Consejo Provincial, sin perjuicio de otras que la Ley señale, las siguientes:

1. Actuar como órgano de consulta del Gobernador de la Provincia, así como de las autoridades municipales, provinciales y nacionales.

2. Requerir informes de los funcionarios nacionales, provinciales y municipales en relación con asuntos concernientes a la Provincia. Para estos efectos, los funcionarios provinciales y municipales están obligados, cuando los Consejos Provinciales así lo soliciten, a comparecer personalmente ante éstos para rendir informes verbales.

3. Preparar cada año, para la consideración del Órgano Ejecutivo, el plan de obras públicas, de inversiones y de servicios de la Provincia y fiscalizar su ejecución.

4. Supervisar la marcha de los servicios públicos que se presten en su respectiva Provincia.

5. Recomendar al Órgano Ejecutivo los cambios que estime convenientes en las divisiones administrativas de la Provincia.

6. Solicitar a las autoridades nacionales y provinciales estudios y programas de interés provincial.

Artículo 279.- [Sesiones del Consejo Provincial] El Consejo Provincial se reunirá en sesiones ordinarias una vez al mes, en la cabecera de la Provincia o en el lugar de ésta que el Consejo determine; y, en sesiones extraordinarias, cuando lo convoque su Presidente o a solicitud de no menos de la tercera parte de sus miembros.

TITULO IX

REGIMEN ECONOMICO Y FINANCIERO

Capítulo 1o.

Bienes del Estado

Artículo 280.- **[Bienes]** Pertenecen al Estado:

1. Las aguas marinas, lacustres y fluviales, así como sus playas, riberas, puertos y muelles.
2. El espacio aéreo, la plataforma continental submarina, el mar territorial, su lecho y subsuelo.
3. Las tierras y las aguas destinadas, o que el Estado destine, a servicios públicos.
4. Los monumentos, documentos y demás testimonios culturales de la Nación.
5. Las tierras baldías y patrimoniales.
6. Las salinas, canteras, aguas termales, depósitos de hidrocarburos, yacimientos de toda clase y demás riquezas del subsuelo.

Estos bienes no son susceptibles de apropiación privada. Sin embargo, los citados en los numerales 5 y 6 podrán ser objeto de concesión u otros contratos para su explotación por personas o empresas privadas.

La Ley regulará esta materia y podrá definir qué otros bienes sean considerados de uso público.

Artículo 281.- **[Restricción de dominio a gobiernos extranjeros]** Ningún gobierno extranjero ni entidad o institución oficial o semioficial extranjera podrán adquirir el dominio sobre parte alguna del territorio nacional. Se exceptúa el caso de embajadas de otros gobiernos, de acuerdo con la Ley.

Artículo 282.- **[Restricción de dominio a personas]** Las personas naturales o jurídicas extranjeras, y las nacionales, cuyo capital sea total o parcialmente extranjero, no podrán adquirir

la propiedad de tierras nacionales o particulares situadas a menos de diez kilómetros de las fronteras del Estado.

Artículo 283.- [Territorio Insular] El territorio insular no podrá enajenarse, sino por autorización de la Ley y para fines específicos de desarrollo del país, siempre que se garantice la seguridad nacional. Si se tratare de las personas a que se refiere el artículo precedente, las islas únicamente podrán ser objeto de concesión.

Artículo 284.- [Concesiones] Las concesiones sobre bienes y servicios públicos estarán sujetas al interés público y al bienestar social.

Artículo 285.- [Caza, pesca, bosques] La Ley regulará la caza, la pesca y el aprovechamiento de los bosques, en armonía con el régimen ecológico establecido en esta Constitución.

Artículo 286.- [Licitación pública] La ejecución o reparación de obras públicas, las compras que se efectúen con fondos del Estado, de los Municipios y de las entidades autónomas y semiautónomas, así como la venta y arrendamiento de los bienes pertenecientes a las referidas instituciones, se harán mediante licitación pública, salvo las excepciones que determine la Ley.

Capítulo 2o.

Moneda, Banca y Tributos

Artículo 287.- [Moneda] La facultad de emitir moneda pertenece al Estado, el cual podrá transferirla a bancos oficiales de emisión, en la forma que determine la Ley.

Artículo 288.- [Bancos oficiales] La Ley creará y regulará bancos oficiales o semioficiales que funcionen como entidades autónomas vigiladas por el Estado y determinará la responsabilidad subsidiaria de éste con respecto a las obligaciones que esas instituciones contraigan. La Ley regulará el régimen bancario.

Artículo 289.- [Legalidad impositiva] Nadie está obligado a pagar contribución, tasa o impuesto que no estén legalmente establecidos y cuya cobranza no se haga en la forma prescrita por la Ley.

Artículo 290.- [Proporcionalidad impositiva] La Ley procurará que todo impuesto grave al contribuyente en proporción directa a su capacidad económica.

Capítulo 3o.

La actividad económica

Artículo 291.- [Regulación estatal] El Estado regulará las actividades económicas.

Artículo 292.- [Participación del Estado en la economía] La participación del Estado en la economía se ajustará a la Ley, atenderá a salvaguardar la justicia social establecida en esta Constitución, y se referirá, en especial, a lo siguiente:

1. Coordinar la prestación de los servicios y la producción de los artículos.
2. Exigir la debida eficiencia de los servicios y la adecuada calidad de los artículos.
3. Regular las tarifas, los servicios y los precios de los artículos especialmente los de primera necesidad.

Artículo 293.- [Empresas estatales] El Estado creará, mediante entidades autónomas o semiautónomas o por otros medios adecuados, empresas de utilidad pública, nacionales, regionales o municipales.

El Estado promoverá la creación de empresas estatales o mixtas para atender las necesidades sociales.

Artículo 294.- [Instituciones Crediticias] El Estado fundará instituciones de crédito y de fomento o establecerá otros medios adecuados para dar facilidades a quienes se dediquen a actividades económicas en pequeña escala.

Artículo 295.- [Cooperativas] El Estado fomentará la creación de cooperativas. La Ley establecerá un régimen especial para su organización, reconocimiento e inscripción, que será gratuita, así como para su funcionamiento y fiscalización.

Artículo 296.- [Limitaciones temporales al dominio] No habrá bienes que no sean de libre enajenación, salvo lo dispuesto en los artículos 57 y 123; tampoco, obligaciones irredimibles. Sin embargo, valdrán hasta un término máximo de treinta años las limitaciones temporales al derecho de enajenar y las condiciones o modalidades que suspendan o retarden la redención de las obligaciones.

Artículo 297.- [Comercio al por menor] Sólo podrán ejercer el comercio al por menor los panameños por nacimiento y los naturalizados después de tres años de la fecha en que hubieren obtenido su carta definitiva de naturaleza.

Artículo 298.- [Comercio al por mayor] El comercio al por mayor podrá ser ejercido por cualquier persona natural o jurídica. La Ley podrá restringir el ejercicio, de dicho comercio por los extranjeros, cuando exista la necesidad de proteger a panameños que ejerzan esta actividad.

Artículo 299.- [Monopolios] La Ley podrá establecer monopolios oficiales, mixtos o particulares, por comprobados motivos de utilidad pública y de interés social.

Podrán establecerse por Ley, como arbitrio rentístico, monopolios oficiales sobre artículos importados o que no se produzcan en el país.

Artículo 300.- [Juegos de suerte y azar] El Estado explotará los juegos de suerte y azar y las actividades que originen apuestas, de acuerdo con la Ley. Pero, mediante autorización de ésta, podrá otorgar la explotación de dichos juegos y actividades a particulares.

Artículo 301.- [Protección de la libre competencia] Es prohibido en el comercio y en la industria toda combinación, contrato o acción cualquiera que tienda a restringir o imposibilitar el libre comercio y la competencia, con efectos de monopolio en perjuicio del público.

Habrá acción popular para demandar ante los tribunales el establecimiento de prácticas monopolizadoras ilícitas.

La Ley regulará esta materia.

Capítulo 4o.

El Presupuesto General del Estado

Artículo 302.- [Adopción del presupuesto] La elaboración del proyecto de Presupuesto General del Estado corresponde al Órgano Ejecutivo; y al Órgano Legislativo su examen, aprobación o desaprobación.

Artículo 303.- [Vigencia y contenido del presupuesto] El Presupuesto tendrá vigencia anual y contendrá la totalidad de las inversiones, ingresos y egresos del sector público, que incluye a las entidades autónomas, semiautónomas y empresas estatales.

Artículo 304.- [Consultas presupuestarias] El Órgano Ejecutivo celebrará consultas presupuestarias con las diferentes dependencias y entidades del Estado. La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa participará en dichas consultas.

Artículo 305.- [Presupuestos de algunas dependencias] La Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Procurador General de la Nación, el de la Administración, el Tribunal Electoral y la Fiscalía Electoral formularán los presupuestos de sus respectivas dependencias y los remitirán oportunamente al Órgano Ejecutivo para su inclusión en el proyecto de Presupuesto General. El Presidente de la Corte Suprema, el de la Corte Constitucional, el Procurador General, el Procurador de la Administración, el Presidente del

Tribunal Electoral y el Fiscal Electoral podrán sustentar en todas las etapas sus respectivos proyectos de Presupuesto.

Los presupuestos del Órgano Judicial, de la Corte Constitucional, del Ministerio Público y de la Procuraduría de la Administración, no serán inferiores, en conjunto, al cuatro por ciento de los ingresos corrientes del Gobierno Central y los del Tribunal y la Fiscalía Electorales, a los siete décimos del uno por ciento de dichos ingresos.

Cuando las aludidas cantidades resultaren superiores a las requeridas para cubrir las necesidades previstas, el Órgano Ejecutivo transferirá el excedente a otros renglones de gastos o inversiones, para que la Asamblea Nacional determine lo que proceda.

Artículo 306.- [Equilibrio del presupuesto] En el Presupuesto General los egresos estarán equilibrados con los ingresos y el Ejecutivo deberá presentarlo a la Asamblea Nacional al menos tres meses antes de la expiración del año fiscal en curso.

Artículo 307.- [Facultades presupuestarias de la Asamblea Nacional] La Asamblea Nacional podrá eliminar o reducir las partidas de los egresos previstos en el proyecto de Presupuesto. Se exceptúan las destinadas al servicio de la deuda pública, al cumplimiento de las demás obligaciones contractuales del Estado y al financiamiento de las inversiones públicas previamente autorizadas por la Ley, las cuales entrarán en vigencia aún si es rechazado el Proyecto de Presupuesto.

La Asamblea no podrá aumentar ninguna de las erogaciones previstas en el proyecto de Presupuesto o incluir una nueva erogación, sin la aprobación del Consejo de Gabinete, ni aumentar el cálculo de los ingresos, sin el concepto favorable del Contralor General de la República.

Si, conforme a lo previsto en este artículo, se eleva el cálculo de los ingresos o si se elimina o disminuye alguna de las partidas de egresos, la Asamblea Legislativa podrá aplicar las cantidades así disponibles a otros gastos o inversiones, siempre que obtenga la aprobación del Consejo de Gabinete.

Artículo 308.- [**Vigencia del proyecto presupuestario**] Si el proyecto de Presupuesto General del Estado no fuere votado a más tardar el último día del año fiscal en curso, entrará en vigencia el proyecto propuesto por el Órgano Ejecutivo, el cual lo adoptará mediante decisión del Consejo de Gabinete.

Artículo 309.- [**Rechazo del proyecto y prórroga del presupuesto**] Si la Asamblea Nacional rechaza el proyecto de Presupuesto General del Estado, se considerará automáticamente prorrogado el Presupuesto del ejercicio anterior hasta que se apruebe un nuevo proyecto.

Artículo 310.- [**Créditos suplementales o extraordinarios**] Cualquier crédito suplemental o extraordinario referente al Presupuesto vigente, será solicitado por el Órgano Ejecutivo y aprobado por la Asamblea Legislativa, en la forma que señale la Ley.

Artículo 311.- [**Rentas sustitutivas**] Las Leyes que establezcan ingresos comprendidos en el Presupuesto, no podrán ser derogadas o modificadas, si al mismo tiempo no se crean rentas sustitutivas o se aumentan las existentes, previo informe de la Contraloría General de la República sobre la efectividad fiscal de éstas.

Artículo 312.- [**Requisitos de validez del gasto público**] No podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido autorizado de acuerdo con la Constitución o la Ley. Tampoco podrá transferirse ningún crédito a un objeto no previsto en el respectivo Presupuesto.

Artículo 313.- [**Integración del presupuesto**] Todas las entradas y salidas de los tesoros públicos deben estar incluidas y autorizadas en el respectivo Presupuesto. No se percibirán entradas por impuestos que la Ley no haya establecido ni se pagarán gastos no previstos en el Presupuesto.

Capítulo 5o.

La Contraloría General de la República

Artículo 314.- [Conformación de la Contraloría] La Contraloría General de la República es una institución independiente, cuya función es fiscalizar el manejo de los fondos y demás bienes públicos. Estará a cargo de un Contralor General, secundado por un Subcontralor, quienes serán designados por la Asamblea Nacional para un período igual al del Presidente de la República. Dichos funcionarios ocuparán sus cargos a partir del primero de enero siguiente al inicio de cada período presidencial ordinario y no podrán ser suspendidos ni removidos sino por la Corte Suprema de Justicia, en virtud de causas definidas previamente por la Ley.

Artículo 315.- [Requisitos para ser Contralor] El Contralor y el Subcontralor de la República deben ser ciudadanos panameños por nacimiento; poseer título universitario; tener no menos de cuarenta años de edad; y no haber sido condenados con pena privativa de la libertad por delito contra la administración pública.

Artículo 316.- [Funciones de la Contraloría] Son funciones de la Contraloría General de la República, además de las contenidas en la Ley, las siguientes:

1. Fiscalizar, regular y controlar todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se realicen con corrección y según lo establecido en la Ley.

La Contraloría ejercerá el control posterior sobre los actos de manejo y determinará, razonadamente, los casos excepcionales en que ejercerá el control previo.

2. Examinar las cuentas de los agentes y empleados de manejo, cuando surjan reparos a las mismas por razón de supuestas irregularidades.

3. Demandar la inconstitucionalidad de las Leyes y demás actos que estime violatorios de la Constitución; así como la ilegalidad de los actos administrativos que considere violatorios de la Ley, cuando afecten patrimonios públicos.

4. Realizar inspecciones e investigaciones tendientes a determinar la corrección o incorrección de las operaciones que afecten patrimonios públicos y, en su caso, presentar las denuncias respectivas.

5. Recabar de los funcionarios correspondientes, informes sobre la gestión fiscal de las dependencias públicas, nacionales, provinciales, municipales, autónomas o semiautónomas y de las empresas estatales.

6. Llevar las cuentas nacionales, incluso las referentes a las deudas interna y externa.

7. Examinar, intervenir y fenecer las cuentas de los funcionarios, entidades o personas que administren, manejen o custodien fondos u otros bienes públicos.

8. Establecer y promover la adopción de las medidas necesarias para que se hagan efectivos los créditos a favor de las entidades públicas.

9. Establecer los métodos de contabilidad de las dependencias públicas señaladas en el numeral 5 de este artículo.

10. Dirigir y formar la estadística nacional.

11. Nombrar los empleados de sus departamentos de acuerdo con esta Constitución y la Ley.

12. Informar a la Asamblea Nacional y al Órgano Ejecutivo sobre el estado financiero de la Administración Pública y emitir concepto sobre la viabilidad y conveniencia de la expedición de créditos suplementales o extraordinarios.

13. Presentar al Órgano Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa el informe anual de sus actividades.

TITULO X

LA FUNCION PUBLICA

Capítulo 1o.

Disposiciones Generales

Artículo 317.- [**Servidores públicos**] Las personas nombradas permanente o temporalmente en los órganos, instituciones o dependencias estatales; y, en general, las que perciben remuneración del Estado son servidores públicos, empleados públicos o funcionarios.

Artículo 318.- [**Nacionalidad de los servidores públicos**] Los servidores públicos serán de nacionalidad panameña, salvo en los casos en que la Ley autorice la contratación o nombramiento de extranjeros.

Artículo 319.- [**Deberes y derechos de los servidores públicos**] Los servidores públicos desempeñarán personal y cabalmente sus funciones y percibirán por ello una justa remuneración. Tendrán derecho, asimismo, a la jubilación o pensión correspondiente.

Artículo 320.- [**Prohibición de doble remuneración**] Los servidores públicos no podrán percibir dos o más sueldos pagados por el Estado, ni desempeñar puestos con jornadas simultáneas, salvo los casos especiales que determine la Ley.

Artículo 321.- [**Prohibiciones sobre contratos**] Los servidores públicos no podrán celebrar por sí mismos, o por interpuestas personas, contratos con la entidad o institución en que trabajan, cuando éstos sean lucrativos y de carácter ajeno al servicio que prestan.

Artículo 322.- [**Declaración jurada sobre el estado patrimonial**] Todos los altos funcionarios y los empleados públicos de manejo deben presentar una declaración jurada de su estado patrimonial al inicio y al término de sus funciones.

La Ley regulará esta materia.

Artículo 323.- [Responsabilidad subsidiaria del Estado] En los casos de abuso de poder o de extralimitación de funciones responderá primordialmente el Estado, sin perjuicio de la responsabilidad que cupiere al servidor público.

Capítulo 2o.

Las Carreras Públicas

Artículo 324.- [Deberes y derechos de los funcionarios de carreras] Los deberes y derechos de los servidores públicos de carrera, así como las normas para sus nombramientos, ascensos, suspensiones, traslados, destituciones, cesantías y jubilaciones serán establecidas por la Ley.

Artículo 325.- [Estabilidad en el servicio] Los servidores públicos de carrera sólo podrán ser nombrados y removidos en estricto cumplimiento de las disposiciones legales y mediante fiel observancia del debido proceso. Se regirán por el sistema de méritos; y la estabilidad en sus cargos estará condicionada por la competencia, moralidad y lealtad en el servicio.

Artículo 326.- [Institución de carreras] Se instituyen las siguientes carreras en la función pública:

1. La Carrera Administrativa
2. La Carrera Judicial
3. La Carrera Docente
4. La Carrera Diplomática y Consular
5. La Carrera Policial
6. La Carrera del Servicio Legislativo
7. La demás que la Ley establezca

La Ley regulará la estructura y organización de estas carreras, de conformidad con las necesidades de la Administración Pública.

Artículo 327.- [Funcionarios excluidos de las carreras públicas] No forman parte de las carreras públicas:

1. Los funcionarios cuyo nombramiento regula esta Constitución.
2. Los Directores y Subdirectores Generales de entidades autónomas y semiautónomas.
3. Los servidores públicos nombrados por tiempo determinado o por períodos fijos establecidos en la Ley, y los que sirvan cargos **ad-honorem**.
4. El personal de secretaría y de servicio inmediatamente adscrito a los funcionarios que no forman parte de una carrera pública.
5. Los funcionarios con mando y jurisdicción que no estén dentro de una carrera.
6. Los profesionales, técnicos o trabajadores manuales que se requieran para servicios temporales, interinos o transitorios en los Ministerios o en las instituciones autónomas o semiautónomas.
7. Los Jefes de Misiones Diplomáticas que la Ley determine.

TITULO XI

LA FUERZA PUBLICA

Artículo 328.- [Servicios de policía] La República de Panamá no tendrá ejército.

Para la conservación del orden público, la protección de la vida, honra y bienes de quienes se encuentren bajo jurisdicción del Estado y para la prevención de hechos delictivos, la Ley organizará los servicios de policía necesarios, con mandos y escalafón separados, sin autonomía administrativa, financiera y de proveeduría.

El Presidente de la República es el jefe supremo de todos los servicios de policía. Sus integrantes, como agentes de la autoridad, estarán subordinados al poder civil y, en consecuencia, acatarán las órdenes que emitan las autoridades nacionales, provinciales o municipales en el ejercicio de sus funciones legales.

Artículo 329.- [Principio de no deliberación] Los miembros de la fuerza pública no son deliberantes y no podrán hacer manifestaciones o declaraciones políticas, en forma individual o colectiva. Tampoco podrán intervenir en política partidista, salvo para emitir el voto. El desacato a la presente norma acarreará la destitución inmediata del cargo, además de las sanciones que establezca la Ley.

Artículo 330.- [Monopolio oficial de armamento] Sólo el gobierno podrá poseer armas y elementos de guerra. Para su fabricación, importación y exportación se requerirá permiso previo del Ejecutivo. La Ley definirá las armas que no deban considerarse como de guerra y regulará su importación, fabricación y uso.

TITULO XII

EL CANAL DE PANAMA

Artículo 331.- [Inalienabilidad del Canal] El Canal de Panamá constituye un patrimonio inalienable de la Nación Panameña.

Artículo 332.- [Neutralidad del Canal] El Canal de Panamá permanecerá abierto al tránsito pacífico de las naves de todos los países; y su uso, sujeto a los requisitos y condiciones que establezca su administración.

Artículo 333.- [Administración del Canal] Créase una entidad de Derecho Público autónoma, con personalidad jurídica, patrimonio propio y derecho a administrarlo, a la cual corresponderá privativamente la administración y el mantenimiento de las estructuras y la actualización permanente del sistema del Canal de Panamá.

La composición de los órganos de dicha persona de Derecho Público; requisitos, incompatibilidades y forma de elección y remoción de sus integrantes; así como sus atribuciones, potestades, responsabilidades, regímenes laboral, administrativo, económico, financiero, presupuestario, ecológico y demás disposiciones pertinentes, serán desarrollados mediante una Ley que sólo podrá ser reformada por las dos terceras partes de los miembros de dos legislaturas consecutivas, de la Asamblea Legislativa.

Artículo 334.- [Tratados sobre el Canal] Los tratados o convenios internacionales que celebre el Órgano Ejecutivo sobre el Canal de esclusas, su zona adyacente y la protección de dicho Canal, así como para la construcción de un Canal a nivel del mar o de un tercer juego de esclusas, o para cualquier otro proyecto que modifique el status de la vía, deberán ser aprobados por el Órgano Legislativo, y luego de su aprobación serán sometidos a referendo nacional, que no podrá celebrarse antes de los tres meses siguientes a la aprobación legislativa.

Ninguna enmienda, reserva o entendimiento que se refiera a dichos tratados o convenios tendrá validez si no cumple con los requisitos de que trata el párrafo anterior.

Esta disposición se aplicará también a cualquier contrato que celebre el Órgano Ejecutivo con alguna empresa o empresas particulares o pertenecientes a otro Estado o Estados, sobre la construcción de un Canal a nivel del mar o de un tercer juego de esclusas.

TITULO XIII

LA REFORMA DE LA CONSTITUCION

Artículo 335.- [Cláusula de Reforma] La iniciativa para proponer Reformas Constitucionales corresponde a la Asamblea Nacional, al Consejo de Gabinete, a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte Constitucional. Las reformas deberán ser aprobadas mediante uno de los siguientes métodos:

1. Por un Acto Constitucional aprobado en primer debate por la respectiva Comisión Permanente de la Asamblea Nacional; y, en segundo y tercer debates, por la mayoría absoluta de los miembros de dicha Asamblea.

El acto aprobado en esta primera etapa de la Reforma debe ser publicado en la Gaceta Oficial y en diarios nacionales por el Órgano Ejecutivo y transmitido por éste a la Asamblea Nacional, dentro de sus primeros cinco días hábiles de sesiones ordinarias siguientes a las elecciones para la renovación del Órgano Legislativo, a efecto de que en la primera legislatura de éste sea también considerado en tres debates y aprobado por mayoría absoluta en el segundo y tercero.

En los respectivos debates, la segunda Asamblea Nacional puede introducir correcciones y modificaciones, pero sin incluir materias adicionales a las aprobadas por la Asamblea que inició la Reforma.

2. Por un Acto Constitucional aprobado en primer debate por la respectiva Comisión Permanente de la Asamblea Nacional; y, en segundo y tercero, por las dos terceras partes de los miembros de dicha Asamblea en una legislatura ordinaria; y aprobado, de idéntica manera, en tres debates de la misma Asamblea, en la legislatura ordinaria siguiente, la cual podrá modificar, reformando o adicionando, el proyecto considerado en la legislatura anterior.

3. Por un Acto Constitucional acordado en una Asamblea Constituyente elegida mediante votación popular, la cual tendrá la función exclusiva de hacer cambios o reformas parciales o totales a la Constitución Nacional.

La referida Asamblea Constituyente estará integrada de la siguiente manera:

Por nueve Constituyentes Nacionales elegidos por mayoría simple de votos mediante el sufragio de los electores de toda la Nación. Dichos Constituyentes podrán ser postulados libremente o por uno o varios partidos, sin atender a la residencia o procedencia de los candidatos y no podrán ser prorratados o distribuidos por regiones, provincias, comarcas u otras circunscripciones administrativas, electorales o geográficas.

Por Constituyentes Provinciales elegidos, en cada Provincia, a razón de uno por cada sesenta mil habitantes y uno más por un residuo que no baje de treinta mil.

Las Provincias y Comarcas con menos de sesenta mil habitantes elegirán un Constituyente, si la población de ellas no es inferior a treinta mil.

Los cambios o reformas que adopte dicha Asamblea Constituyente no alterarán los períodos vigentes de los Órganos del Estado ni el de otras autoridades constituidas, hayan sido éstas elegidas por votación popular o designadas por períodos determinados de acuerdo con la Constitución.

La Ley que convoque a la elección de la Asamblea Constituyente señalará, entre otras cosas, el término durante el cual ésta funcionará. La Constituyente se disolverá al vencer el término señalado en dicha Ley, o antes de esa fecha, si ha concluido su misión al hacer formal entrega al Órgano Ejecutivo de los cambios o reformas constitucionales que haya acordado.

Artículo 336.- [Vigencia de los actos constitucionales] El Acto Constitucional aprobado con arreglo a cualquiera de estos tres métodos, empezará a regir desde su promulgación en la Gaceta Oficial, lo cual deberá hacer el Órgano Ejecutivo dentro de los diez días hábiles que sigan a la aprobación definitiva del acto, ya sea por la Asamblea Nacional o por la Constituyente, sin que la publicación posterior al señalado término afecte la validez del acto.

Artículo 337.- [Objeción de Inexequibilidad de reformas constitucionales] Las Reformas que la Asamblea Nacional introduzca a esta Constitución sólo podrán ser impugnadas, en el curso de cualquiera de sus etapas, por el Órgano Ejecutivo mediante objeción de inexequibilidad. Dicha objeción deberá basarse sólo en irregularidades de procedimiento en la respectiva etapa.

Artículo 338.- [Carácter de las reformas] Las reformas parciales que se introduzcan a la Constitución llevarán numeración sucesiva, basada en la fecha en que se perfeccione el respectivo Acto Constitucional; las que cambien, modifiquen o transformen sustancialmente la Carta vigente, equivaldrán a una nueva Constitución.

TITULO XIV

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Artículo 339.- [Vigencia de la Constitución] Esta Constitución entrará en vigencia a partir de su promulgación.

Artículo 340.- [Normas derogadas] Quedarán derogadas todas las Leyes y demás normas jurídicas que sean declaradas contrarias a esta Constitución.

Artículo 341.- [Epígrafes de artículos] Los epígrafes que preceden a los artículos de esta Constitución carecen de valor normativo y no pueden ser utilizados para interpretar ni aplicar las respectivas normas constitucionales.

Artículo 342.- [Nombramiento de los Magistrados de la Corte Constitucional] El primer nombramiento de Magistrados y Suplentes de la Corte Constitucional se hará, respectivamente, por dos, cuatro, seis, ocho y diez años. Posteriormente, cada dos años, será nombrado un Magistrado y su Suplente para un período de diez años.